

EN ESTA EDICIÓN

- ¿Por fin acuerdo en la Ronda de Doha? 1
- Agricultura, nuevo texto revisado 3
- Negociaciones industriales podrían llegar a un acuerdo a pesar de las diferencias MERCOSUR celebra "una Cumbre más" 4
- Comunidad Andina ve difícil identificación de fines comunes 5
- Perú aprueba leyes de propiedad intelectual contrarias a normativa andina 6
- "Farm Bill" y Doha, oportunidad perdida 7
- Cumbre mundial sobre crisis alimentaria 8
- El aumento mundial en el precio de los alimentos: ¿Cómo enfrentar el problema? 9
- Joachim von Braun 11
- Propiedad intelectual y salud: ¿un nuevo rol para la OMS? 13
- Judit Rius Sanjuan
- Propiedad intelectual y acceso a tecnologías ambientales 16
- Vanessa Lowenstein
- Las subvenciones no-agrícolas en la OMC: consideraciones para la negociación 18
- Pablo Klein Bernard
- Migración y desarrollo: oportunidades y desafíos 20
- Dulce María Valle Álvarez
- ICTSD al día 23
- Eventos y publicaciones 24



International Centre for Trade and Sustainable Development



¿Por fin acuerdo en la Ronda de Doha?

La OMC podría estar cerca de llegar a un acuerdo muy importante en la Ronda de Doha. La impresión compartida en Ginebra y el trabajo intensificado en los grupos de negociación durante las últimas semanas, demuestran que la próxima semana podría ser decisiva para que los ministros de alrededor de una treintena de economías concluyan un trato a favor de la liberalización comercial multilateral.

En la víspera de la reunión mini-ministerial del próximo 21 de julio, en donde se intentará lograr un resultado en agricultura y acceso a los mercados no agrícolas, se dieron a conocer nuevas versiones revisadas de los textos de negociación. Los mediadores de esos grupos anunciaron que con ese paso se allanaba el camino para que los ministros tomen las decisiones correspondientes.

Al momento del cierre de esta edición, el presidente de la negociación agrícola, Crawford Falconer, estaba llevando a cabo una reunión informal de 'transparencia' abierta a todos los Miembros de la OMC para escuchar sus impresiones antes del próximo lunes. En

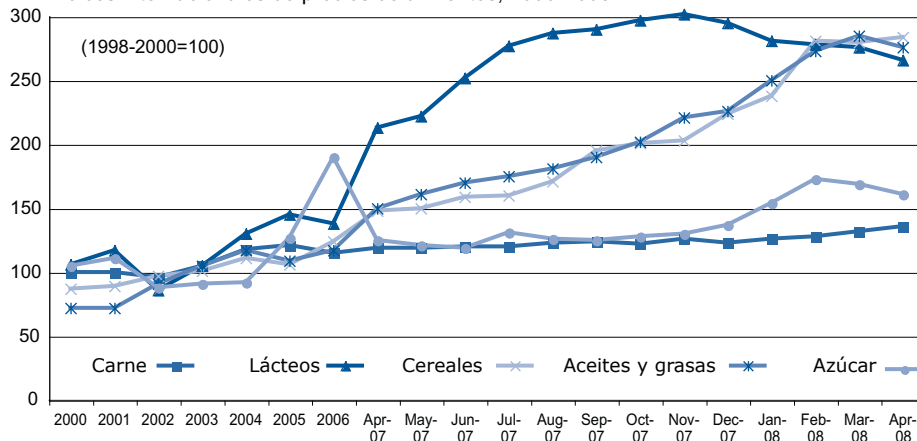
la negociación industrial, por su parte, se han dejado notar las persistentes diferencias entre países desarrollados y en desarrollo sobre cómo hacer frente a las reducciones arancelarias.

El contexto político por el que está atravesando tanto EE.UU. como la Unión Europea, según señaló un negociador proveniente de un país en desarrollo, no es muy positivo para la finalización exitosa de las negociaciones. Por un lado, EE.UU. pronto llevará a cabo elecciones presidenciales, y el representante comercial de ese país ya no cuenta con la 'autoridad de promoción comercial'. Esta es una herramienta que le permite al Poder

¿Sabía Ud.?

Existen indicios de que la mayoría de los precios de los alimentos llegaron a su máximo y comienzan a descender, a excepción del precio del arroz que continuó creciendo. El índice de precios internacionales de los alimentos de la FAO promedió 218.2 en abril de este año, lo cual representa una leve disminución del nivel registrado en marzo que fue de 218.4, aunque todavía es 54% mayor al registrado en abril de 2007.

Índices internacionales de precios de alimentos, 2000-2008



Fuente: FAO. (2008). Food Outlook Global Markets Analysis. Roma.

Estimado lector,

El momento decisivo en la Ronda de Doha podría estar por llegar. A partir del lunes 21 de julio, ministros de diversos países estarán reunidos en Ginebra para intentar lograr un acuerdo, y revalidar así a la institución encargada de pugnar por la liberalización comercial multilateral.

En esta edición les presentamos los cambios de los recién divulgados textos revisados de agricultura y acceso a los mercados no agrícolas, los que conformarán el eventual acuerdo comercial.

Los acontecimientos en la región latinoamericana también merecen especial atención. En nuestra sección de análisis damos cobertura a la Cumbre del MERCOSUR recientemente celebrada. Luego, tratamos sobre la suspensión de las negociaciones entre la Comunidad Andina y la Unión Europea, en su intento por dar forma a un Acuerdo de Asociación. Las complicaciones que Perú enfrenta con sus socios andinos a propósito del régimen de propiedad intelectual en el marco de su Acuerdo de Promoción Comercial (APC) con EE.UU., también son tratadas en este número.

Asimismo, el "Farm Bill", criticado por la gran mayoría de los Miembros de la OMC, y la crisis en los precios de los alimentos, merecieron un análisis de nuestra parte.

En la sección comentarios aprovechamos para compartir puntos de vista sobre distintas problemáticas. Joachim von Braun analiza el alza en los precios de los alimentos y delinea posibles políticas para contrarrestar este fenómeno. Judit Rius nos cuenta sobre el nuevo rol de la Organización Mundial de la Salud en materia de propiedad intelectual y salud pública. Vanesa Lowenstein también aborda la propiedad intelectual aunque vinculada con la negociación de bienes y servicios ambientales en la OMC. Pablo Klein hace un análisis sobre cómo mejorar las disciplinas en materia de subsidios dada la dificultad de aplicar medidas compensatorias en el marco de la OMC. Por último, Dulce Valle escribe sobre cómo debería abordarse la problemática de la migración desde una perspectiva de desarrollo.

Una vez más deseamos que este número le sea de utilidad, y le invitamos a seguir consultando nuestras publicaciones.

Cordialmente,

El equipo de Puentes

Ejecutivo presentar un acuerdo comercial ante el Congreso para que éste lo apruebe o lo rechace. Por otro lado, las tensiones públicas entre los Estados miembros del bloque europeo también dan una mala señal.

Sin embargo, como comentara otro funcionario, los delegados han "invertido mucho tiempo y recursos" para dejar pasar una vez más la oportunidad de alcanzar un acuerdo.

El estado del resto de las negociaciones

Aunque el acento primordial está puesto en agricultura y acceso a mercados no agrícolas, otros temas de la agenda de Doha podrían lograr ciertos avances aprovechando la presencia de los ministros:

Servicios

En las negociaciones de servicios las discusiones más recientes trataron principalmente sobre la preparación de la 'conferencia indicativa' que se llevará a cabo el 24 de julio. Dicha conferencia tendrá como finalidad establecer las directrices para la futura liberalización de los servicios. Los Miembros más activos en el área 'indicarán' los compromisos que estarían dispuestos a tomar en los distintos sectores y modos de suministro.

Las 'indicaciones' no son obligatorias ni equivalen a ofertas finales de compromisos de liberalización. No obstante, EE.UU. y la UE, antes de firmar cualquier tipo de acuerdo en materia agrícola y de bienes industriales, han expresado querer conocer cómo podría ser un posible trato en servicios. De momento, reuniones bilaterales se están llevando cabo en las instalaciones de la OMC.

Propiedad intelectual

Miembros de la OMC discuten de manera informal un documento que recientemente fue presentado por una coalición de países desarrollados y en desarrollo, y el cual busca establecer modalidades de negociación sobre tres asuntos relacionados con la propiedad intelectual.

El primero se refiere a la revelación del origen de la información genética contenida en las solicitudes de patentes. Con esta medida se persigue que el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) sea compatible con el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Los otros dos temas tratan sobre la protección de las indicaciones geográficas. Por un lado se quiere que las mismas se extiendan a todos los productos; y por el otro se pretendería la creación de un registro multilateral para indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas.

El documento, que está respaldado por una coalición liderada por Brasil, India, la UE y Suiza, delinea de qué manera estos controversiales asuntos podrían abordarse durante la semana del 21 de julio. No obstante, Pascal Lamy ha advertido en varias oportunidades que la falta de acuerdo en el área de propiedad intelectual podría convertirse en un serio obstáculo para la conclusión de la Ronda de Doha.

Normas

El tema de normas (antidumping, subsidios generales y subsidios a la pesca), el cual se había anunciado que formaría parte del proceso horizontal, será aplazado hasta septiembre, según lo ha hecho saber el presidente de ese grupo. En su comunicación a los Miembros, el Embajador Guillermo Valles (Uruguay) aclaró que en nuevo texto incluirá sólo aquellos asuntos en los cuales el consenso es factible, pero que en ningún caso ofrecerá 'soluciones mágicas'. Según la agenda propuesta por Valles, se esperan negociaciones intensivas en pesca durante las primeras semanas de septiembre, seguidas por discusiones en antidumping y subsidios.

¿Por fin habrá acuerdo?

Según Pascal Lamy, quien ponderaba las probabilidades de éxito de la Ronda en un 50 por ciento el mes pasado, declaró este martes en el marco del lanzamiento del Informe Anual sobre Comercio Mundial 2008, que no las evaluaría por encima del 70 u 80 por ciento. Con ese espíritu positivo que ha sido incluso cuestionado, también agregó que un acuerdo en Doha contribuiría a "despejar las nubes negras del horizonte económico". De acuerdo con las estimaciones de la OMC, un acuerdo en Doha se traduciría en un impulso de alrededor de 50 mil millones de dólares por año a la economía, principalmente por la reducción de los aranceles, en una proporción de dos terceras partes por parte de los países desarrollados, y el resto por los países en desarrollo.

Como Lamy ha venido anunciando desde hace semanas, un acuerdo es posible, se puede hacer. Como ha sido costumbre en la OMC, julio suele ser el mes efectivo para generar algunos avances antes del receso de verano. No obstante, dado el creciente escepticismo sobre los beneficios del libre comercio, y la tendencia cada vez más generalizada hacia la protección, no podría de ninguna manera garantizarse que la última palabra ya está dicha.

Agricultura, nuevo texto revisado

Según el presidente de las negociaciones sobre la agricultura, Crawford Falconer (Nueva Zelanda), el nuevo proyecto de texto de agricultura, publicado al final de la semana pasada, simplifica las cuestiones más importantes de las negociaciones agrícolas y facilitará el trabajo de los ministros durante la reunión ministerial prevista para la semana próxima.

El nuevo texto actualiza las versiones precedentes, publicadas en febrero y mayo pasados, sin presentar grandes cambios en las áreas consideradas más controversiales: reducción de aranceles y de subvenciones. El documento, sin embargo, establece opciones más claras para los "productos especiales" que los países en desarrollo podrán proteger de dichas reducciones arancelarias con base en criterios de seguridad alimentaria, seguridad de los medios de subsistencia y desarrollo rural.

Topes arancelarios: Falconer presenta nuevo enfoque

Actualmente las posiciones de los Miembros están divididas con respecto a si los aranceles más altos deberían estar sujetos a un tope general. Los países exportadores de productos agrícolas miembros del grupo Cairns y G-20 son favorables a tal límite. La coalición G-10, conformada por los países industrializados importadores netos de productos agrícolas, se manifestó en contra de dichos topes. El texto indica que Islandia, Japón, Noruega y Suiza podrían superar ese límite general. En principio, una vez aplicada la fórmula general de reducción arancelaria y excluyendo a los productos sensibles, ningún Miembro podrá mantener aranceles superiores al 100 por ciento. En compensación estos países deberán ofrecer mayor acceso a sus mercados a través de la expansión de sus cuotas de importación o de mayores recortes.

Aranceles intra-cuota

Los grupos Cairns y G-20 se oponen al G-10 en relación al nivel de reducción arancelario de los derechos intra-cuota. Mientras que el G-20 aboga por una reducción a cero de dichos aranceles, el G-10 sostiene que no debe haber reducciones en dicha área. La Unión Europea (UE), por su parte, propone que los aranceles intra-cuota sean reducidos al nivel de 15 por ciento y que aquellos que se encuentren por debajo de ese nivel sean reducidos a cero. El texto propone reducir los aranceles intra-cuota entre un 50 y un 70 por ciento. Todos los aranceles en esta área deberán reducirse a un nivel de entre 0 y 15 por ciento. Los aranceles de entre 0 y 5 por ciento deberán eliminarse. Los países en desarrollo tendrán mayor flexibilidad al respecto.

Productos especiales: señales de convergencia

El presidente Falconer indicó que los Miembros hicieron progresos en las negociaciones sobre los productos especiales. El G-33, quien aboga por mayor flexibilidad en esta área ha tenido que lidiar con la férrea oposición por parte de los países exportadores netos de productos agrícolas - desarrollados y en desarrollo. El nuevo texto prevé que los países podrán seleccionar como productos especiales, de entre el 10 y 18 por ciento de sus líneas

arancelarias. Entre el cero y el seis por ciento de total de las líneas arancelarias podrán ser exceptuadas de las reducciones. Todos los productos especiales deberán ser sometidos a una reducción arancelaria promedio de entre el 10 y 14 por ciento.

Mecanismo de salvaguarda especial: ¿podrían sobrepasarse los límites consolidados?

Aún no está claro cuándo y bajo qué condiciones los países en desarrollo podrán aplicar aranceles de salvaguardia temporales que excedan los límites consolidados pre-Doha. Diversos países exportadores argumentan que si se superan los aranceles máximos consolidados, los objetivos de liberalización comercial de la Ronda Doha podrían verse perjudicados. El G-33, por otro lado, argumenta que esto último es indispensable para el funcionamiento de la salvaguardia que por su parte, es necesaria para alcanzar los objetivos de desarrollo de la Ronda. Existen distintos mecanismos que activan las salvaguardias así como distintos tipos de 'remedios'. No obstante, el texto dice que el arancel adicional que se imponga producto de la salvaguardia no podrá superar el nivel consolidado antes de la Ronda de Doha, salvo para un número limitado de productos. Asimismo, las economías pequeñas y vulnerables y los países de menor desarrollo relativo, podrían tener mayor flexibilidad y por lo tanto menores restricciones para aplicar dichas medidas.

Productos sensibles y tropicales

A pesar del constante desacuerdo entre los Miembros respecto del controvertido y complejo tema que representan los productos sensibles, el nuevo texto no presenta grandes cambios en esta área. Aún faltaría que algunos Miembros aporten información detallada sobre su consumo doméstico. Dichos números serán utilizados para establecer la expansión de las cuotas de acceso a mercado.

Otras cuestiones que siguen sin resolverse son la liberalización más rápida para los productos tropicales, apoyada por diversos países latino-americanos, y la liberalización más lenta para aquellos productos afectados por la erosión de preferencias, una preocupación para los países del grupo África, Caribe y Pacífico (ACP). Los dos grupos de países presentan intereses opuestos en ciertos productos como el banano y el azúcar. Las dos partes se han reunido en varias oportunidades con la UE desde el mes de marzo, pero no se ha alcanzado ningún acuerdo en la materia.

En el caso particular del banano, el Director General de la OMC, Pascal Lamy, habría circulado hace pocos días entre el bloque europeo y los países latinoamericanos productores de esa fruta, un documento que esbozaría una base para zanjar finalmente tal controversia. Se cree que el conflicto del banano podría bloquear un futuro acuerdo.

Negociaciones industriales podrían llegar a un acuerdo a pesar de las diferencias

Más sencillo, más 'limpio', es como se presentó el nuevo texto revisado para las negociaciones de acceso a los mercados no agrícolas (AMNA).

En conferencia de prensa la semana pasada, el presidente del grupo de negociación, el Embajador Don Stephenson (Canadá), declaró que en esta nueva versión se ofrecen las opciones a los ministros de una manera más clara. Agregó que solamente había modificado las secciones del texto de mayo en donde los Miembros habían mostrado convergencia.

La negociación de AMNA ha estado básicamente centrada en determinar la fórmula aplicable a las reducciones arancelarias, así como las flexibilidades. En la versión de mayo el presidente había sugerido un coeficiente entre 7 y 9 para los países desarrollados, frente a los tres rangos de coeficientes para los países en desarrollo dependiendo de las flexibilidades por las que optasen: 19-21, 21-23 y 23-26. Estos valores, sin embargo, han sido muy criticados por Brasil, India, Sudáfrica y otros, quienes alegan que se les exige mucho en la negociación; y por EE.UU. y la Unión Europea (UE), quienes esperan que se les de mayor acceso a los mercados de aquellos países.

El presidente, por las discusiones que sostuvo en las últimas semanas con negociadores de alto nivel, llegó a la conclusión de no cambiar los rangos de los coeficientes. En otras partes del texto eliminó corchetes para reflejar el acuerdo alcanzado, como en los períodos de implementación para países desarrollados (cinco años) y en desarrollo (diez años), el tratamiento para las líneas arancelarias no consolidadas, la cláusula de anti-concentración para evitar que las flexibilidades se apliquen a capítulos enteros del Sistema Armonizado (SA), así como el tratamiento especial para establecer las flexibilidades comunes en el caso del MERCOSUR.

Iniciativas sectoriales, novedad en el texto

Stephenson advirtió que el documento es considerablemente más largo dado que se agrega una parte nueva sobre liberalizaciones sectoriales, la que va más allá de la reducción arancelaria estándar.

En el texto de mayo se había contemplado la posibilidad de que los países en desarrollo pudieran aplicar coeficientes mayores a cambio de participar en iniciativas sectoriales. Esta propuesta de EE.UU. fue rechazada por algunos países en desarrollo bajo el argumento de que el mandato define que la participación en las sectoriales es voluntaria.

Sin embargo, como precisó el presidente, tales iniciativas serían consideradas en una etapa posterior, y obedecerían más bien a discrecionalidad política; con lo que no se espera que los ministros empiecen a hacer intercambios entre bicicletas y autopartes, por ejemplo.

Compromiso en anti-concentración

Anteriormente se había incluido una propuesta de la UE y de EE.UU. que tiene por objeto evitar que algún Miembro "concentre" las flexibilidades en algún sector, por lo que instituía 'candados' para no excluir de la fórmula capítulos enteros del SA.

La nueva versión confirma la idea original, pero establece dos opciones a los Miembros para cumplir con el estándar: ya sea aplicando las reducciones de la fórmula (es decir, no usando las flexibilidades) en un número mínimo de líneas arancelarias dentro de cada capítulo del SA, o aplicando las reducciones de la fórmula a un porcentaje mínimo del valor de las importaciones dentro de cada capítulo.

En sus impresiones al nuevo texto, China ha dicho que la cláusula de anti-concentración va en contra del propósito de las flexibilidades. Argentina, por su parte, ha alegado que una cláusula similar debería aplicarse a las negociaciones agrícolas. En tal sentido, los países desarrollados no enfrentarían tales controles en los productos 'sensibles', los que gozarían de reducciones arancelarias menores. La UE ha dicho que la cláusula de anti-concentración es esencial para asegurar un acceso significativo en todos los sectores industriales.

Alternativa para MERCOSUR

El texto de julio también incluyó sin corchetes un posible compromiso sobre tratamiento especial para el MERCOSUR. A diferencia de la versión anterior, en donde se proponía calcular el porcentaje del valor de las importaciones para efectos de las flexibilidades considerando al MERCOSUR como si fuera un sólo Miembro de la OMC (es decir, basado en una lista común de flexibilidades, usando las importaciones totales de MERCOSUR de bienes industriales y excluyendo el comercio entre sus partes), el presidente ahora propuso que se siga presentando una lista común, pero que el porcentaje del valor de las importaciones se mida usando las importaciones totales de Brasil.

Argentina sobre este respecto, ha demandado mayores flexibilidades para el MERCOSUR para que cada miembro proteja sus sectores industriales más sensibles sin comprometer sus estructuras arancelarias externas. Sin mencionar en particular el asunto del MERCOSUR, Jorge Taiana, Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, ha mencionado que el texto no es satisfactorio para Argentina.

¿Listos para un acuerdo?

Argentina, Brasil, India, Sudáfrica y otros miembros del NAMA-11, persisten en la falta de observancia de "la no reciprocidad plena" en los compromisos de reducción de aranceles. Insisten en que el coeficiente para los países desarrollados debe ser de cinco. EE.UU., por su lado, ha recalcado que un posible acuerdo tendrá que surgir sobre la base del texto del presidente, y no de otros valores.

No se sabe hasta qué punto estas diferencias en realidad persisten, o si más bien son posturas de tipo político que hay que asumir antes de que inicie la reunión mini-ministerial de la siguiente semana. En todo caso, el camino está trazado para que los ministros intenten llegar simultáneamente a un acuerdo en agricultura y acceso a mercados industriales a partir del lunes.

MERCOSUR celebra “una Cumbre más”

El MERCOSUR acaba de celebrar su XXXV Consejo del Mercado Común y Cumbre Presidencial. Como resultados resaltan el traspaso de la presidencia *pro tempore* de Argentina a Brasil, el acuerdo para un plan de integración productiva y la condena unánime de la recién aprobada normativa migratoria de la Unión Europea (UE). Para muchos, el resultado no fue el esperado ya que no abordó temas verdaderamente útiles para los fines de la integración, convirtiéndose así en “una Cumbre más”.

La gestión de Argentina

Durante su período de presidencia *pro tempore*, Argentina no logró culminar la redacción del código aduanero común. En tal sentido, Paraguay solicitó que se postergara el asunto con la finalidad de que el nuevo presidente electo analice la normativa en cuestión. A pesar de ello, también se aceptó que no se han resuelto algunas divergencias en torno a aspectos sensibles como la definición del territorio aduanero. Se evidencian viejas imperfecciones para un conjunto de países que aspiran ser un bloque: la ausencia de un arancel externo común, la existencia del doble cobro de aranceles y la indeterminación sobre cómo repartir la renta aduanera. Lo anterior, que constituía uno de los puntos de mayor interés para Uruguay, no logró a juicio de la prensa de este país, mayor eco en esta Cumbre.

Otro tema sin resolver sigue siendo la entrada de Venezuela al bloque, pues durante estos seis meses de presidencia argentina, los Parlamentos de Brasil y Paraguay no se pronunciaron sobre el ingreso efectivo de aquel país.

Retenciones producen tensiones

El impuesto a las exportaciones de granos que está imponiendo Argentina a sus productores locales debería ser discutido dentro del MERCOSUR pues afecta de manera sustancial a todos los países Miembros. Esa es la opinión del Uruguay, quien se opuso férreamente a validar las retenciones argentinas dentro del bloque.

Argentina intentó que las retenciones figuraran como un derecho de los Miembros del bloque, convirtiéndolas en un mecanismo válido dentro del código aduanero aún en discusión. Sin embargo, Uruguay manifestó su oposición a éstas por considerar que generan problemas de competitividad y abastecimiento en el resto de los países. Brasil prefirió no pronunciarse directamente sobre el tema de las retenciones y sostuvo que de todas maneras la negociación del código debía seguir adelante. Venezuela por su parte apoyó la posición argentina.

No existe aún certeza sobre cómo se resolverá esta diferencia de concepciones, pues Argentina ha dicho que es un tema “no negociable” y Uruguay percibe que es un contrasentido permitir las retenciones en el marco de la tan buscada eliminación del doble cobro de aranceles.

Crítica a la UE

Por el contrario, un tema en que los países Miembros mostraron unanimidad de opinión fue en el rechazo a la Directiva de Retorno, normativa común europea que homologa los procesos en contra de inmigrantes ilegales que se encuentran en la UE. El MERCOSUR pidió al bloque europeo “reciprocidad histórica”, partiendo del hecho de

que América Latina fue la gran receptora de inmigrantes europeos en épocas en que ese continente estaba en dificultades.

El repudio a dicha normativa no ha tenido impacto pacífico; algunos sectores de la prensa uruguaya cuestionaron la reacción del MERCOSUR. Sostienen que si los países Miembros se avocaran a la misión de lograr una integración productiva, habría menos emigrantes de quienes preocuparse.

Integración productiva, nuevo eje de acción

Precisamente en relación al tema de una integración que vaya más allá de lo comercial, se discutió sobre el Programa de Integración Productiva y el Fondo Pyme, planes que buscan promover la integración de las empresas productivas de la región, en especial las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Una iniciativa de este tipo es novedad en el bloque, pues hasta el momento el tema central ha sido la integración comercial. Para los altos funcionarios argentinos el MERCOSUR está “ante una bisagra en la construcción de nuestro mercado común que [nos] proyecta más allá de la mera concepción comercial”.

MERCOSUR en el sistema multilateral

La Declaración de la XXXV Reunión del Consejo del Mercado Común incorpora también ciertas cuestiones relacionadas con el comercio multilateral. Entre ellas se destaca la preocupación de los países Miembros por el establecimiento de límites máximos de residuos de plaguicidas en los vegetales por parte de algunos países. El bloque sostiene que se trata de una medida restrictiva que carece de suficiente respaldo científico.

Lo mismo sucede con el nuevo régimen de Registro, Evaluación y Autorización de Sustancias Químicas de la Unión Europea (también conocido como REACH), el cual, según el MERCOSUR, podría convertirse en una barrera técnica al comercio al elevar los costos de producción de las industrias químicas de los países en desarrollo.

Asimismo coincidieron en identificar que la causa primordial de la actual crisis alimentaria es de orden estructural y que se origina en los subsidios a la producción y exportación, así como en la aplicación de barreras desproporcionadas al comercio por parte de los países desarrollados.

En definitiva la última cumbre del MERCOSUR provoca una sensación de que, si bien no hubo amenazas de Uruguay de abandonar el bloque o expresos reclamos de Paraguay de que MERCOSUR no le beneficia lo suficiente, tampoco se lograron avances que permitieran dar cuenta de una senda integracionista, realizable y útil para los países Miembros.

Comunidad Andina ve difícil identificación de fines comunes

La Comunidad Andina (CAN) vio con la salida de Venezuela en 2006 uno de sus más difíciles momentos. Los desencuentros internos que han venido sucediendo desde ese entonces demuestran una seria erosión en la unidad y en la identificación de fines comunes. Actualmente los temas más sensibles son la posición frente a la Unión Europea (UE) en la negociación de un Acuerdo de Asociación (AdA), así como la modificación de la Decisión 486.

Impasse en negociación de AdA con Europa

Desde el lanzamiento mismo de las negociaciones entre la CAN y la UE se vislumbró un camino difícil. El bloque andino emitió la Decisión 667 cuyo objetivo era poner fin a las diferencias entre los Miembros en lo que respecta a la negociación con los europeos. Sin embargo, en la práctica ha existido menos anuencia de la esperada sobre las distintas velocidades con que quieren negociar por un lado Colombia y Perú, y por el otro Bolivia y Ecuador.

Las amenazas de los presidentes boliviano y ecuatoriano de romper las negociaciones con la UE a causa de la llamada "Directiva de Retorno" de inmigrantes, la cual fuera aprobada el 18 de junio por el Parlamento Europeo, no tuvieron que ser ejecutadas pues de manera unilateral y sorpresiva la UE decidió suspender la IV Ronda de negociaciones. Las razones esgrimidas por el bloque europeo corroboran que las diferencias internas de la CAN no cuentan con el respaldo esperado: los europeos arguyeron que la ausencia de posiciones conjuntas en los temas de comercio y desarrollo sostenible, y propiedad intelectual, fueron determinantes para decidir que el bloque andino necesita resolver internamente esas diferencias antes de proseguir con las negociaciones.

Del mismo modo, las declaraciones de la Ministra de Comercio Exterior de Perú, Mercedes Aráoz, denotan una fuerte inconformidad con la puesta en práctica de lo acordado en la Decisión 667. Para la Ministra, la actitud de Bolivia se ha convertido en una "carga" y un "permanente bloqueo" que complica las negociaciones "por pura ideología". La principal oposición de Bolivia es en materia de derechos de propiedad intelectual, desarrollo sostenible y servicios públicos, todos temas en donde combate fuertemente la posibilidad de otorgamiento de derechos a privados, y más aún, a empresas transnacionales.

Ante esta situación, los peruanos intentarán lograr una negociación individual y sustraerse de la negociación de 'bloque a bloque' que no está dando los avances que se aspiraban. Sin embargo, esta postura chocaría con la imposibilidad práctica de la Comisión Europea (CE) de negociar con cada país de la CAN. Esto porque el mandato de negociación que la CE obtuvo del Consejo Europeo es claro en establecer una negociación birregional.

El consejero de asuntos políticos, económicos y comerciales de la UE en Perú, Francisco Acosta, consideró difícil reanudar las negociaciones con la CAN antes de

septiembre, tanto por la apretada agenda de la CE, como por las diferencias internas en la CAN.

Para Acosta, la decisión de la UE no tuvo que ver con la reciente aprobación de la "Directiva de Retorno". Dicha directiva produjo un pronunciamiento conjunto por parte de los mandatarios de la CAN haciendo un llamado a un diálogo integral en esta materia, y señalando que esta normativa migratoria contradecía la Declaración Conjunta de la Cumbre América Latina-Unión Europea, la que se produjo en mayo pasado. En un tono mucho más fuerte, los mandatarios boliviano y ecuatoriano aseguraron que explorarían la posibilidad de cortar el diálogo en el marco de las negociaciones del AdA con la UE.

Perspectivas

En síntesis, las argumentaciones entre Bolivia y Perú giran en torno a lo siguiente: Bolivia percibe que con sus pretensiones Perú está resquebrajando la normativa comunitaria, pues pretende imponer a los países andinos concesiones que otorgó bilateralmente a los EE.UU. (al igual que Colombia). Perú, por su parte, no ha dudado en afirmar que Bolivia intenta imponer su particular modelo de desarrollo a los demás países Miembros de la CAN, lesionando de este modo su facultad soberana de elegir un modelo de desarrollo propio.

Debe tomarse en cuenta que la negociación del APC entre Perú y los EE.UU. se hizo en el marco de la Decisión 598 del 11 julio de 2004, (cuando apenas se habían llevado dos rondas de negociaciones de dicho APC), la que regula precisamente las relaciones comerciales con terceros países. En su artículo 2, esta Decisión faculta a los países Miembros a negociar individualmente con terceros países, siempre y cuando cumplan con preservar el ordenamiento jurídico andino en las relaciones entre los países Miembros de la CAN; tomar en cuenta las sensibilidades comerciales de los otros socios andinos; y mantener un apropiado intercambio de información y consultas en el desarrollo de las negociaciones dentro de un marco de transparencia y solidaridad.

Las situaciones descritas han generado fuertes dudas en torno a la unidad del bloque. El Comité Empresarial Ecuatoriano por ejemplo, manifestó que las divergencias marcadas dentro de la CAN, hacen que de bloque solamente tenga el nombre. Más allá de estas percepciones que tendrán que ser evaluadas con el tiempo, lo que sí pareciera estar claro es que a la CAN todavía le falta mucho trabajo para convertirse en el "organismo de integración económica y social" que pretender ser.

Perú aprueba leyes de propiedad intelectual contrarias a normativa andina

Desde 2007 Perú ha intentado convencer a sus socios de la Comunidad Andina (CAN) de modificar el régimen común andino sobre propiedad intelectual¹. Esto por cuanto los compromisos que asumió en un acuerdo comercial con los Estados Unidos (EE.UU.) así lo requieren. Con la expectativa de lograr adecuar la normativa comunitaria, el gobierno peruano realizó los cambios requeridos en su legislación interna, los cuales entrarían a regir a partir de la entrada en vigor del acuerdo con los EE.UU., prevista para inicios de 2009.

Producto de la ratificación del Acuerdo de Promoción Comercial (APC) con los EE.UU., Perú solicitó a sus socios de la CAN realizar 17 modificaciones a la Decisión 486 - la cual define el Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina- en temas como patentes, marcas, indicaciones geográficas y observancia.

Dentro de las solicitudes se destacan modificaciones positivas, como establecer claramente el derecho que tiene cualquier persona de realizar cierto tipo de actos (como ensayos con un producto protegido por patente a efectos de poder comercializarlo en cuanto venza la protección), en relación a un producto patentado -por lo general farmacéutico pero también agroquímico- antes del vencimiento de la patente. Esto es lo que se conoce como la excepción Bolar, y con ella se promovería mayor competencia y se beneficiaría a los consumidores. Algunos expertos de todos modos consideran que ese tipo de medida ya se encuentra abarcada bajo las excepciones a los derechos del titular de la patente, art.53 de la normativa andina.

Pero la solicitud peruana también incluye temas controversiales y rechazados por el gobierno boliviano y por organizaciones no gubernamentales, como el Comité de Defensa de Derechos del Consumidor (Bolivia), la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, INFARMA (Colombia), Terre des Hommes (Italia), entre otras.

Los temas cuestionados comprenden:

- Extender el plazo de prioridad o esperar 14 meses para registrar una patente en casos excepcionales.
- Abrir la posibilidad, excepto para productos farmacéuticos, de compensar al titular de una patente por retrasos "irrazonables" en la expedición de la misma, incluyendo la restauración del plazo o los derechos de la patente.
- Adiciones al criterio de patentabilidad conocido como aplicabilidad industrial, de forma que en lo sucesivo se le otorgue éste a una invención que "posea una utilidad específica, sustancial y creíble".
- Impedir el uso de una denominación de origen idéntica o similar a una marca. Es decir, orientarse hacia una protección de las denominaciones de origen que estaría condicionada por la protección de marcas.
- Extender las medidas en frontera para sancionar a quienes se sospeche que estén violando registros de marca para bienes o servicios en tránsito.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha rechazado la solicitud peruana aduciendo que viola la Decisión 598 de la CAN, la cual establece que "toda negociación de acuerdos comerciales a nivel bilateral debe primero preservar el ordenamiento jurídico andino". Pero además, porque considera que el

aumento de la exclusividad de mercado causada por reglas de propiedad intelectual más estrictas representa "mayor protección para las transnacionales que controlan el 90 por ciento de las patentes en el mundo, por lo que una modificación de la Decisión 486 es para favorecer a las transnacionales"². No obstante, "Bolivia puede cambiar de posición, pero espera de Perú argumentos técnicos convincentes", según el vicescanciller boliviano Hugo Fernández³.

Por su parte, autoridades peruanas han manifestado que Bolivia no entiende el significado de las modificaciones solicitadas, y que "lamentablemente [...] quiere imponer su modelo al resto [de la CAN] a través de una actitud permanente de bloqueo", según las palabras Mercedes Aráoz, Ministra de Comercio Exterior⁴.

Confundiendo en que logrará modificar la normativa andina, el pasado 28 de junio se publicó un conjunto de decretos legislativos mediante los cuales el presidente del Perú, Alan García, promulgó un paquete de leyes de implementación del APC con los EE.UU.⁵. Dentro del paquete destaca el Decreto Legislativo 1075, que realiza una serie de modificaciones a la legislación nacional sobre derechos de propiedad intelectual para ponerla en concordancia con el APC, pero que riñen con la normativa de la CAN.

El último pasaje de esta diferencia se vivió el pasado dos de julio, cuando en una reunión del Consejo de Ministros de Comercio de la CAN se sometió a votación una propuesta por parte del Perú para suspender por tres meses la normativa andina sobre propiedad intelectual. La propuesta fue apoyada por todos menos por Bolivia.

Así las cosas, Perú esperaría someter nuevamente a votación su propuesta en la próxima reunión de ministros, que se realizaría 30 días después de la primera, y en la que "ya no sería necesario el consenso sino la aprobación mayoritaria" para aceptar su solicitud, según declaraciones de Aráoz⁶. De no fructificar esta iniciativa, Perú deberá buscar otra forma de modificar la Decisión 486 antes de que entre a regir el APC con los EE.UU.; de modo contrario, su permanencia en el bloque podría verse cuestionada.

1 Secretaría General de la Comunidad Andina. (2007). *Propuesta de la República del Perú para la modificación de la Decisión 486, régimen común sobre propiedad industrial*. Lima.

2 Evo Morales objetó modificar la decisión 486 de la CAN y pidió una reunión urgente a Uribe. (2008, 17 de junio). *MERCOSUR noticias*.

3 Bolivia aceptaría cambio en CAN sobre propiedad industrial si hay razones. (2008, 17 de junio). *AFP*.

4 Bolivia se opone a cambios en norma de la CAN que no permiten aplicar TLC al Perú. (2008, 3 de julio). *EFE*.

5 El Peruano. (2008, 28 de junio). Año XXV No 10276. 374971.

6 En 30 días se aprobarán medidas complementarias a Decisión N° 486 de la CAN ante nueva negativa de Bolivia. (2008, 3 de julio). Andina.

“Farm Bill” y Doha, oportunidad perdida

Las críticas de los socios comerciales así como del propio presidente George Bush y el Secretario de Agricultura, Ed Schafer, no fueron suficientes para evitar que el Congreso estadounidense aprobara una nueva ley que aumenta el gasto agrícola en aproximadamente US\$300 mil millones hasta 2012. En esta ocasión aprovechamos para comentar las implicaciones de dicha ley en relación con las negociaciones comerciales multilaterales.

Luego de superar el veto infringido por el presidente Bush a mediados de mayo, la llamada “Ley de agricultura, nutrición y bioenergía de 2008”, o mejor conocida como “Farm Bill”, ha sido objeto de fuertes críticas por parte de analistas, tanto al interior como fuera de los Estados Unidos (EE.UU.). La condena a dicha ley por parte del Presidente Bush fue elocuente: “Esta ley carece de reformas y disciplina fiscal, en momentos de altos precios a los alimentos, e ingresos agrícolas récord.[...]. Continúa [subsidiando] a los ricos e

incrementa el gasto agrícola en más de US\$20 mil millones [...] es inconsistente con nuestros objetivos en las negociaciones comerciales internacionales”¹.

Se estima que tres cuartas partes del gasto de la ley serán destinados a ayuda alimentaria, mientras que el 10% sería para productos básicos y el 16% para otros programas². No obstante, los nuevos programas incluidos

“el Congreso estadounidense ha dejado pasar una excelente oportunidad”

en la ley, así como la ampliación y modificación de los existentes, hacen suponer que los márgenes de negociación de los EE.UU. en la OMC se han estrechado notablemente; pero además, han creado dudas sobre la posibilidad de culminar las negociaciones bajo la Ronda de Doha este año. De acuerdo con las últimas propuestas en la OMC que Washington ha insinuado que aceptaría, el límite para la ayuda global causante de distorsión al comercio caería del nivel actual de US\$48 mil millones a US\$13-16.4 mil millones. Cabe aclarar que el monto gastado por Washington en ese rubro ascendió a US\$7 mil millones en 2007. Sin embargo, tal reducción podría no estar conforme a los niveles de subsidios aprobados en la reciente ley agrícola. Particular preocupación presentan el nuevo programa de seguro de ingresos, la ayuda por desastres y los subsidios para el azúcar y el algodón, sin dejar de lado el cierto progreso en lácteos.

Los pagos contracíclicos

El nuevo programa opcional llamado *Average Crop Revenue Election* (ACRE) se propone proteger a los agricultores contra las caídas de los precios, así como contra las malas cosechas. El cálculo de los pagos bajo el ACRE se realizaría tomando en cuenta las cosechas de los últimos cinco años, así como el precio promedio nacional del cultivo en los dos últimos años. El ACRE se accionaría cuando el ingreso real del Estado para algún cultivo fuera menor al ingreso garantizado. Los agricultores que opten por este nuevo programa deberán

renunciar a otros como el de pagos directos y el de préstamos para mercadeo. El nuevo programa ha sido presentado como una forma de hacer que los actuales programas de productos básicos de los EE.UU. estén más acordes con las normas de la OMC dado que toman en consideración las cosechas y no sólo los precios. Recordemos que los pagos contracíclicos de los EE.UU. fueron declarados ilegales por la OMC en el caso del algodón. Sin embargo, según expertos³, puesto que los pagos que incluyen “cantidad de producción” también están sujetos a compromisos en el Acuerdo sobre Agricultura, los pagos contracíclicos del ACRE podrían ser catalogados como causantes de distorsión al comercio. Por lo tanto, los EE.UU. tendrían dificultades para cumplir con sus compromisos de reducción de la Medida Global de Ayuda.

Otra preocupación es que la fórmula de pago de ACRE está basada en los precios de los cultivos para los dos últimos años. En ese sentido, debido a que 2006 y 2007 muchos cultivos han alcanzado precios récord, la probable caída de los mismos en el mediano plazo podría disparar las ayudas a los agricultores en caso de que muchos opten por suscribirse a dicho programa.

La nueva ley agrícola también introduce un nuevo y permanente programa para afrontar los desastres. El mismo cuenta con un presupuesto de US\$3.85 mil millones y permitiría a los agricultores que sufren pérdidas en sus cultivos debido a problemas climáticos, recibir pagos tanto por el seguro de cultivos como por la ayuda por desastres. Este programa también estaría clasificado dentro del Compartimento Ámbar.

El azúcar, el algodón y los lácteos

Los cambios introducidos a los subsidios a la producción de bienes básicos también podrían afectar la habilidad de los EE.UU. de respetar sus compromisos dentro del Compartimento Ámbar. Bajo la nueva ley, la tasa de crédito para la asistencia en el mercadeo del azúcar de caña aumentará 4.2% entre 2008 y 2012, mientras que para el azúcar de remolacha esta misma tasa aumentará 5.2% el año entrante. De acuerdo con Paul Bergener⁴, economista de la Universidad de Nebraska-Lincoln, dado que la tasa de crédito equivale a un precio mínimo garantizado, la ley agrícola aumenta los subsidios al azúcar. Otra de las medidas cuestionadas es el establecimiento de una cuota local de azúcar igual al 85% del consumo.

En el caso de los subsidios al algodón la nueva ley agrícola contempla algunas de las recomendaciones del Grupo Especial (GE) de la OMC sobre el caso de algodón interpuesto

por Brasil. En particular es de resaltar la modificación del programa de garantías de créditos a las exportaciones GSM 102 y la eliminación del programa GSM 103. Sin embargo, otras medidas cuestionadas por el GE como los pagos directos, no fueron eliminadas, además de que se incluyeron pagos a las fábricas de algodón que utilizan algodón del altiplano. Esta última medida conocida como los subsidios al algodón "Step 2", había sido eliminada cuando el GE emitió su fallo.

En términos generales el título de productos básicos incorpora al programa de pagos contracíclicos cuatro nuevos cultivos, e incrementa las tasas de crédito para 15 de ellos y los precios objetivo para 17. En palabras de Schafer "esto es apoyo causante de distorsión al comercio que hace nuestros programas vulnerables a demandas del extranjero"⁵.

Uno de los pocos avances de la nueva ley agrícola es respecto a los productos lácteos. La Ley modifica la distribución de los precios de apoyo a los lácteos de forma que reduce la ayuda causante de distorsión, y mantiene los niveles de apoyo para los productores de lácteos aproximadamente en el mismo nivel.

Perspectivas

Los críticos de la Farm Bill 2008 afirman que el Congreso estadounidense ha dejado pasar una excelente oportunidad para reformar el gasto público en subsidios agrícolas y la consecuente menor presión de los socios comerciales. Según estadísticas del Departamento de Agricultura de los EE.UU., el ingreso neto agrícola alcanzaría US\$92.300 millones este año, 56% superior al registrado en 2006, lo cual habría hecho el ajuste menos doloroso y más viable⁶.

Si bien es cierto que existe la posibilidad de que se llegue a un acuerdo en la Ronda de Doha, y que el Ejecutivo estadounidense lo presente en el Congreso para su aprobación con la correspondiente modificación de la ley agrícola, tal escenario parece poco factible. Para analistas como Lori Wallach, directora de *Public Citizen's Global Trade Watch*, y actores como Colin Peterson, presidente del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes, lo que fue acordado para la nueva ley es lo que los EE.UU. aceptarán por los próximos cuatro años⁷.

¹ Bush, G. (2008, 21 de mayo). *Farm Bill Veto Message*. Washington D.C.

² Para los detalles de la Ley ver: Farm Bill: Se espera que subsidios agrícolas superen veto de Bush. (2008). *Puentes Quincenal*. V-10. en http://www.ictsd.org/puen_quince/08-05-21/BR.htm#1

³ Murphy, S. & Suppan, S. (2008). *The 2008 Farm Bill and the Doha Agenda*. Minneapolis, Minnesota: IATP.

⁴ Ostdiek, David. (2008, 23 de mayo). Farm Bill Positive for Western Nebraska Sugar Beet, Bean Growers - UNL Economist. *Crop Watch News Service*.

⁵ U.S. Department of Agriculture. (2008). *Secretary Schafer, Deputy Secretary Conner Conference Call With Reporters: Announcement Of A New Farm Bill From Congress*. Washington D.C.

⁶ U.S. Department of Agriculture, Economic Research Service. (2008). *2008 Farm Income Forecast*. Washington D.C.

⁷ Khor, Martin. (2008, 19 de mayo). *Trade: US Farm Bill passed, will cast shadow on Doha talks*. Ginebra.

Cumbre mundial sobre crisis alimentaria

En plena escasez relativa de alimentos, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) realizó una conferencia con el fin de abordar el tema de la seguridad alimentaria. Las medidas acordadas en la conferencia, así como las tomadas en diversos ámbitos por los gobiernos, han sido blanco de críticas por no representar soluciones integrales y a largo plazo al viejo problema del hambre.

A pesar de que América Latina es la región que cuenta con el mayor superávit de intercambio de alimentos en el mundo¹, no escapa a esta situación preocupante. La CEPAL estima que tanto ha afectado esta crisis a la región, y más aún, tanto la seguirá afectando, que unos 15 millones de latinoamericanos podrían ser arrastrados a la indigencia, con lo cual el número total ascendería a 84 millones².

La Cumbre de Roma

Cuatro son las cumbres mundiales sobre el hambre que se han realizado a partir de 1974 hasta la reciente celebrada en Roma entre el 3 y el 5 de junio de 2008³. En todas ellas, y la última no es la excepción, los gobiernos invariablemente se han comprometido a avocarse a la tarea de reducir los niveles de pobreza y con ello el hambre. Algunos se preguntarán para qué hacía falta una cumbre mundial adicional que renovara compromisos que ya se habían asumido años atrás sobre un problema tan poco novedoso.

Las medidas a corto plazo de esta ocasión incluyen: un reforzamiento inmediato de los sistemas de asistencia para los países más vulnerables y un "decidido" apoyo a la producción y comercio agrícolas, compromiso dentro del cual, evidentemente, se incluye a su vez el concluir lo antes posible la Ronda de Doha.

La Declaración producto de la citada conferencia también menciona medidas a mediano y largo plazo entre las que se destacan: apoyo a la inversión en agricultura, investigación en torno a la adaptación de la agricultura al cambio climático, mayor liberalización del comercio agrícola y un análisis exhaustivo de los impactos de la producción de biocombustibles.

Hace falta más que una Declaración

Sin embargo, la Declaración terminó diciendo que los países se comprometen a "eliminar el hambre y a garantizar hoy y el día de mañana alimentos para todos", lo que pareciera no ser suficiente para quienes dan seguimiento a este crítico fenómeno.

Algunos gobiernos latinoamericanos y organizaciones civiles del mundo entero se expresaron en contra de lo

que consideran son nada más que medidas tibias para un problema que requiere de intervenciones estructurales radicales. Como la propia Declaración de la Cumbre de Roma reconoce: “La crisis actual ha puesto de manifiesto la fragilidad de los sistemas alimentarios mundiales y su vulnerabilidad ante las situaciones difíciles”. No obstante, lejos de proponer un mayor control del mercado de los alimentos, que luego de tres décadas de desregulación ha vuelto a caer en crisis, lo que hace es pedir más liberalización de los mercados, sólo que combinado con más apoyo a los consumidores pobres.

¿Qué esperar de Doha?

En diversos foros oficiales se apuesta por la conclusión de la Ronda de Doha como la mejor vía para salir a flote de la crisis alimentaria mundial. Los líderes de las principales entidades internacionales que están analizando el tema (Naciones Unidas, la OMC, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional) concuerdan en que el éxito de Doha es un requisito *sine qua non* para superar la crisis.

La razón primordial es que la Ronda de Doha está apuntando a lograr la reducción drástica de subsidios a la agricultura en los países desarrollados. Tales ayudas domésticas son consideradas por los expertos como una importante causa de que las economías en desarrollo hayan comenzado a importar alimentos en detrimento de sus productores locales.

“un problema que requiere de intervenciones estructurales radicales”

Quienes contradicen dicha visión arguyen que en estas negociaciones se están dejando afuera puntos clave del sistema alimentario global, pues no toda la problemática actual de alimentos tiene como causa única los subsidios a la agricultura en los países ricos. Algunos de estos puntos ignorados por Doha serían: el cambio climático, la cuadruplicación de los precios del petróleo, la falta de competencia en los mercados de insumos agrícolas, la ausencia de disciplina en la especulación financiera y la producción insostenible de biocombustibles (ver el artículo de Joachim von Braun en este número).

Restricciones a las exportaciones, la medida equivocada

Desoyendo las recomendaciones de no pocos expertos, en los últimos meses decenas de países han restringido las exportaciones de alimentos como remedio contra el desabastecimiento interno de productos básicos. El Director General de la OMC, Pascal Lamy, manifestó que dichas restricciones agudizan el incremento de los precios de los alimentos. Lo anterior se explica porque las restricciones constriñen la oferta mundial de alimentos, conllevando efectos nefastos para los países que son importadores netos, en especial las economías más vulnerables.

Pero los países exportadores que se autoimponen restricciones también se ven perjudicados al erosionar su credibilidad como fuentes estables de alimentos. La representante de comercio de los EE.UU. Susan Schwab describió la situación

de la siguiente manera: las medidas de un país para proteger su seguridad alimentaria se convierten en la inseguridad alimentaria de otros países. Se refería a las restricciones a las exportaciones efectuadas por terceros países, y no a los altísimos subsidios domésticos de su país (ver artículo sobre el Farm Bill en este número).

Soluciones sólo a corto plazo

Ante la gravedad del problema, el gobierno de México, a manera de mitigación inmediata, arribó a un acuerdo con una de las cámaras más representativas de la industria alimentaria, según el cual los precios de unos 150 productos alimenticios se congelaron desde el 18 de junio pasado hasta fin de año. El acuerdo no ha estado exento de críticas pues pocos productos incluidos forman parte de la canasta básica⁴.

Mientras tanto, los líderes de los países de Centroamérica se reunieron en mayo pasado en Nicaragua con la finalidad de trazar un camino que lleve a la reactivación de la producción de granos básicos en la región.

La idea no ha generado tanta ilusión como se esperaba, ni entre analistas ni entre productores. Según el experto en temas agrícolas Carlos Pomareda⁵, reactivar la producción para aprovechar los altos precios no es tan fácil como parece. Los costos de producción tan elevados son un factor inobjetable. Además, “sembrar no es garantía de cosechar” dado que los riesgos climáticos son muchas veces impredecibles en la región; pero también, a causa del cambio climático, los embates de fenómenos naturales son mucho más intensos y devastadores. Otro punto fundamental es que el agro se convirtió en un sector de poco interés para los gobiernos de la región. No solamente no se dispone de semillas de calidad, sino que hay que aceptar que se ha perdido un gran caudal de conocimiento asociado al agro.

La impresión generalizada en analistas y organizaciones sociales por las decisiones de los gobiernos, es que se está privilegiando la actuación a corto plazo por una razón más que poderosa: el hambre genera violencia, y puede desatar las más graves crisis sociales que conlleven a la ingobernabilidad.

Más allá de sólo evitar el caos subsidiando a los pobres para que puedan comer, se requiere una verdadera estrategia que abarque diferentes aspectos y que a largo plazo garantice lo que en tantas declaraciones se ha plasmado como un compromiso: erradicar el hambre en el mundo que de sobra tiene la capacidad para alimentar adecuadamente a todos.

¹ Banco Mundial (2008). ¿Cuáles son los factores que influyen en el alza de precios de los alimentos y sus efectos en la región? <http://go.worldbank.org/60SND3T680>

² CEPAL. (2008). *Proyecciones de pobreza e indigencia según aumentos de precios de alimentos*. En http://www.eclac.cl/prensa/noticias/comunicados/3/32773/Cuadro_CP180408.pdf

³ Murphy, S. & Smaller, C. (2008). The Real Tragedy behind the Global Food Crisis. <http://www.iatp.org/iatp/commentaries.cfm?refID=102865>

⁴ Martínez, M. (2008, 20 de junio). 4 errores al congelar los precios. CNN Expansión.

⁵ Pomareda, C. (2008). *Los Precios de los Alimentos: Desafíos y Oportunidades en Centroamérica*. San José: SIDA.

El aumento mundial en el precio de los alimentos: ¿Cómo enfrentar el problema?

Joachim von Braun*

Nuevas y potentes fuerzas de cambio en la ecuación alimentaria mundial están transformando el consumo, la producción y los mercados de alimentos. A diferencia del patrón que predominó en las últimas décadas, hoy día, el sistema agrícola mundial está en gran medida impulsado por la demanda.

Debido al aumento de los ingresos en las economías emergentes, la globalización y la urbanización, la demanda de productos agrícolas seguirá creciendo y se desplazará hacia productos básicos de alto valor. Es probable que continúe el elevado consumo mundial de cereales, impulsado en parte por la expansión de los biocombustibles y la demanda de alimentos para ganado. En ese sentido, el International Food Policy Research Institute (IFPRI) ha proyectado que para 2015 la demanda de cereales aumentará hasta en un 20 por ciento en todas las regiones¹.

La lenta respuesta de la producción

Del lado de la oferta, el crecimiento general de la productividad agrícola ha sido demasiado lento para hacerle frente al aumento de la demanda. Entre el 2000 y el 2006, la oferta de cereales creció en un escaso 8 por ciento y las reservas cayeron a niveles bajos. La respuesta de la producción a los altos precios se ve entorpecida principalmente por limitaciones en materia de tierras cultivables y de agua, así como por una insuficiente inversión en la innovación agrícola.

Una mayor producción -impulsada por mejores rendimientos y no por expansiones de la superficie cultivada- y una mejor productividad requieren inversiones considerables en la investigación y el desarrollo, los servicios y los sistemas de suministro de insumos. El cambio climático y el rápido crecimiento demográfico intensifican aún más la necesidad de aumentar la inversión en la ciencia y tecnología agrícola. Aún así, el crecimiento del gasto público mundial en la investigación y el desarrollo agrícolas ha disminuido, especialmente en los países desarrollados.

Otros factores importantes que explican los aumentos drásticos de los precios de productos agrícolas son los factores negativos que han impactado la producción (por ejemplo, la sequía en Australia) y las bajas reservas de granos, lo que hace que los mercados sean más volátiles. El flujo de capital especulativo de los inversionistas financieros, quienes están cada vez más interesados en los precios crecientes de los productos básicos, también contribuye a aumentar la volatilidad de los precios de los alimentos.

Continuará la tendencia alcista en los precios de muchos productos clave

El aumento en los precios de los productos agrícolas ha sido realmente drástico. Desde el 2000 -un año de precios bajos- el precio del trigo se ha cuadruplicado, el precio del maíz casi se ha triplicado y el precio del arroz ha aumentado más del doble². Cuando estas cifras se ajustan de acuerdo

con la depreciación del dólar estadounidense, los aumentos de precios son menores, aunque siguen siendo drásticos, y con frecuencia tienen graves repercusiones en el poder adquisitivo de los pobres.

El análisis del escenario mundial realizado por el IFPRI sugiere que los precios mundiales reales de los cereales y la carne seguirán siendo altos. Si bien es posible que los actuales precios pico no se mantengan a largo plazo, los precios del arroz, el trigo y el maíz aumentarán entre un 20 y un 30 por ciento para el año 2015. Mientras tanto, se proyecta un crecimiento de hasta un 10 por ciento en los precios de la carne de res, de cerdo y de pollo. Estas proyecciones no toman en cuenta los aumentos actuales provocados por políticas comerciales, como las que restringen las exportaciones.

Los energéticos y los biocombustibles

La producción de biocombustibles contribuye a la cambiante ecuación alimentaria mundial y afecta desfavorablemente a los pobres por los efectos que tiene en el nivel y la volatilidad de los precios, y por los programas de bioenergéticos mal diseñados. Los aumentos en la producción de etanol y biodiesel, que en su mayor parte proviene de maíz y semillas oleaginosas, tendrán un efecto considerable en los precios agrícolas debido a que actualmente existe una estrecha correlación con los precios de los energéticos. Los modelos del IFPRI prevén que, hasta 2020, la expansión de los biocombustibles puede dar como resultado, *ceteris paribus*, aumentos del 26 por ciento en el precio del maíz y del 18 por ciento en el de las semillas oleaginosas.

La implicación más preocupante es que los precios volátiles de los energéticos se traducirán en mayores fluctuaciones en los precios de los alimentos. Algunos gobiernos han adoptado regímenes de subsidios a los biocombustibles y los cultivos energéticos que debilitan las ventajas comparativas de los países en desarrollo. Las subvenciones a los biocombustibles que usan los recursos de la producción agrícola actúan como un impuesto implícito sobre los alimentos básicos que representan gran parte del presupuesto de los pobres. Por esta razón, para muchos países tiene sentido esperar a que surjan tecnologías más eficientes, para saltar directamente a ellas sin pasar por las tecnologías actuales.

Respecto al cambio climático, se espera que éste tenga un impacto perjudicial en la producción agrícola. Los países en desarrollo con capacidades de adaptación limitadas experimentarán las mayores pérdidas de producción y un aumento en la inseguridad alimentaria. En muchos países africanos, por ejemplo, la producción agrícola se verá afectada negativamente, lo cual incrementará la inseguridad alimentaria y la desnutrición.

Aunque existen estrategias viables que permitirían mitigar los impactos negativos en el sector agrícola del mundo en desarrollo, primero es necesario superar algunas limitaciones cruciales. Por ejemplo, se debe negociar un régimen de cambio climático internacional "post Kyoto" nuevo y más amplio; además, se requieren normas justas que regulen el acceso al comercio de carbono.

El impacto en las poblaciones pobres

Los precios agrícolas elevados tendrán impactos asimétricos en los diferentes países y grupos demográficos. Los países exportadores netos se beneficiarán con los términos mejorados de comercio, aunque algunos están perdiendo esta oportunidad al imponer prohibiciones a las exportaciones con afán de proteger a los consumidores.

Sin embargo, los importadores netos tendrán dificultades para satisfacer la demanda interna de alimentos para consumo humano y de ganado, o tendrán que pagar altas subvenciones para proteger a los consumidores de los aumentos de precios. Dado que casi todos los países africanos son importadores netos de cereales, éstos se verán gravemente afectados.

Los precios crecientes y volátiles de los alimentos afectan de manera más dramática a aquellos que menos tienen: las personas pobres y las que sufren por inseguridad alimentaria. Las pocas familias pobres que son vendedoras netas de alimentos podrían beneficiarse con los precios altos, pero las que son compradoras netas -la enorme mayoría- se verán perjudicadas. Aunque pasará un tiempo hasta que los ajustes en salarios, empleos y flujos de capital a la economía rural lleguen a las poblaciones pobres, existen oportunidades para transformar este desafío en ventajas para ellas.

La nutrición de los pobres está en riesgo, puesto que las alzas en los precios de los alimentos los inducirán a limitar su consumo y a adoptar dietas menos balanceadas que las actuales, con los consecuentes impactos negativos sobre la salud.

Alrededor de 160 millones de personas continúan viviendo en la pobreza extrema, con menos de 50 centavos al día. En los países de bajos ingresos, un aumento del uno por ciento en el precio de los alimentos suele provocar una disminución del 0.75 por ciento en el gasto en alimentos⁴. A nivel familiar, entre el 50 y el 60 por ciento del presupuesto total de los pobres se destina a la alimentación. Para una familia de cinco personas que subsiste con US\$1 por persona al día, un aumento del 50 por ciento en los precios de los alimentos sustrae hasta US\$1.50 de su presupuesto de US\$5 y esta carga aumenta por los crecientes costos de los energéticos.

Las respuestas de los gobiernos hasta este momento

En un intento por reducir al mínimo los efectos de los altos precios de los alimentos sobre sus poblaciones, muchos países están tomando medidas desesperadas que podrían convertirse en políticas fallidas.

Argentina, Bolivia, Camboya, China, Egipto, Etiopía, India, Indonesia, Kazajstán, México, Pakistán, Rusia, Senegal, Tanzania, Tailandia, Ucrania, Venezuela y Vietnam están

entre los países que han impuesto restricciones a las exportaciones, controles de precios o ambas cosas. China, por ejemplo, ha prohibido las exportaciones de arroz y maíz. India ha hecho lo mismo con las legumbres secas y el arroz distinto del basmati, y elevó el precio mínimo de exportación del arroz basmati. Argentina ha aumentado los impuestos a las exportaciones de soja, maíz, trigo y carne vacuna, mientras que Etiopía y Tanzania han prohibido las exportaciones de los principales cereales.

Otras naciones, incluyendo los países en desarrollo que son importadores netos de alimentos, han reducido los obstáculos a la importación. Marruecos, por ejemplo, ha disminuido del 130 al 2.5 por ciento los aranceles a las importaciones de trigo; Nigeria ha bajado del 100 al 2.7 por ciento los derechos aduaneros a la importación de arroz; Perú ha eliminado los impuestos a la importación de trigo y maíz; y Senegal ha dejado de cobrar aranceles a las importaciones de cereales.

Aunque es posible que estas políticas de respuesta reduzcan los riesgos de que haya escasez de alimentos a corto plazo, es probable que produzcan un efecto indeseado al reducir el tamaño del mercado internacional y hacerlo más volátil. Los controles de precios reducen los incentivos para que los agricultores produzcan más, y desvían los recursos y la ayuda hacia personas que en realidad no los necesitan.

Por un lado, las restricciones a las exportaciones y las subvenciones a las importaciones perjudican a los socios comerciales que dependen de las importaciones, y por el otro, dan incentivos erróneos a los agricultores al reducir el tamaño de sus mercados potenciales. Toda estrategia a largo plazo encaminada a estabilizar los precios de los alimentos deberá incluir un aumento de la producción agrícola.

Las acciones de política requeridas

En muchos países, los incrementos en el costo de los alimentos cumplen hoy día un papel preponderante en el aumento de la inflación, así como en el deterioro de los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria. Sería una política equivocada enfrentar estas causas específicas de la inflación con instrumentos macroeconómicos generales. Más bien, se requieren políticas concretas relacionadas con el mercado y la productividad para contrarrestar las causas y las consecuencias de los altos precios de los alimentos. Esta nueva situación exige políticas de acción eficaces y coherentes en cinco áreas:

- Los países desarrollados deben facilitar respuestas flexibles a las alzas de precio eliminando los obstáculos al comercio. Los subsidios a los biocombustibles y las cuotas de mezcla excesivas deben ser abolidos; además, se debe considerar implementar una moratoria a gran escala y por varios meses a los biocombustibles producidos a partir de granos y semillas oleaginosas. Asimismo, se deben eliminar los programas que ponen en reserva los recursos agrícolas, excepto en zonas de conservación bien definidas. Si bien ha habido cierto avance en reducir políticas que producen

"existen oportunidades para transformar este desafío en ventajas"

distorsiones en el comercio, muchas todavía persisten, y los países pobres no pueden enfrentarlas. La nueva situación alimentaria está cambiando los regímenes comerciales en muchos países, y esto inevitablemente tendrá implicaciones importantes en las negociaciones de la Ronda de Doha, las cuales deberían concluirse.

- Para alcanzar un crecimiento agrícola a largo plazo, los países en desarrollo deben aumentar sus inversiones a corto y mediano plazo en la investigación y extensión agrícolas, en la infraestructura rural y en las instituciones de mercado. Se debe poner fin a las políticas que distorsionan el comercio, las que los países utilizan para perjudicarse unos a otros. Así también, las intervenciones e inversiones de los gobiernos se deben complementar con buenas prácticas de gobernabilidad.
- Para enfrentar el problema a largo plazo de cómo aumentar la producción, se necesita invertir en ciencia y tecnología agrícola a escala nacional y mundial. Una iniciativa mundial en esta materia, dirigida a acelerar la productividad agrícola, tiene sentido económico, favorece a los pobres, es sostenible y refuerza la seguridad.
- También se requieren acciones mundiales para calmar rápidamente a los mercados, como por ejemplo, hacer que el comercio de futuros de productos básicos sea más costoso y establecer una regulación adecuada para ese tipo de mercados. Asimismo, como se mencionó arriba, se requiere la implementación de una moratoria temporal a los biocombustibles derivados de los granos y las semillas oleaginosas. También se necesitaría establecer una reserva mundial y pública de granos, por ejemplo, en forma de un conjunto coordinado de compromisos asumido por una 'coalición de naciones que se preocupan', conformada por los principales países productores de granos, que haría entregas coordinadas del grano de esa reserva si los precios aumentaran de manera excesiva.
- Los graves riesgos que enfrentan las poblaciones pobres debido a la disminuida disponibilidad de alimentos, los altos precios y el acceso limitado a oportunidades que generen ingresos, ameritan iniciativas integrales de protección social en materia de alimentación y nutrición. Como parte de una respuesta mundial, también es necesario aumentar los recursos del Programa Mundial de Alimentos. En tal sentido, se requiere que las redes de seguridad social tales como las transferencias de alimentos o de dinero, se orienten a las personas más pobres, dando énfasis a la nutrición durante la infancia temprana.

* Director General del International Food Policy Research Institute (IFPRI) en Washington, D.C.

1 von Braun, Joachim. 2007. *The World Food Situation - New driving forces and required actions*. IFPRI. Washington, D.C.

2 FAO. 2008. *International commodity prices database*.

3 von Braun, Joachim. 2007. *When Food Makes Fuel - The promises and challenges of biofuels*. Crawford Fund. Canberra.

4 Regmi, Anita et al. 2001. "Cross-country Analysis of Food Consumption Patterns" en *Changing Structure of Global Food Consumption and Trade*. US Department of Agriculture Economic Research Service. Washington, D.C.

Propiedad intelectual y salud: ¿un nuevo rol para la OMS?

Judit Rius Sanjuan*

El 24 de mayo de 2008, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó por consenso la resolución 61.21¹ que contiene una estrategia mundial y un plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad intelectual. Este es el documento más importante en salud pública y propiedad intelectual desde la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y la salud pública adoptada por la OMC el 14 de noviembre de 2001.

Para muchos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) está iniciando un proceso de transformación, que con muchos paralelos con el Programa de la OMPI para el Desarrollo, redefinirá la relación entre salud pública, innovación y propiedad intelectual. La OMS y sus Estados Miembros han reconocido que no puede asegurarse un tratamiento sostenible sin modificar el proceso de incentivo a la innovación.

La resolución 61.21 es el resultado de un largo y complicado proceso de negociación en la OMS que empezó con la resolución 52.19 y se consolidó con la creación en 2003 de la Comisión sobre Derechos de Propiedad Intelectual, Innovación y Salud Pública (CIIH, por sus siglas en inglés) y el detallado informe resultante con más de 60 recomendaciones².

Como continuación de este proceso, en mayo de 2006 la resolución 59.24³ creó el Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelectual (IGWG, por sus siglas en inglés). El IGWG tenía como mandato elaborar una estrategia mundial y plan de acción a fin de proporcionar un marco a mediano plazo basado en las recomendaciones del Informe de la CIIH. La estrategia y el plan de acción debían tener como objeto, entre otras cosas:

"Proporcionar una base más firme y sostenible a las actividades de investigación y desarrollo esenciales y orientadas por las necesidades que revistan importancia para las enfermedades que afectan de manera desproporcionada a los países en desarrollo, proponer prioridades y objetivos claros para la investigación y el desarrollo, y estimar las necesidades de financiación en esa esfera".

Para la elaboración de la estrategia mundial y el plan de acción, a parte de organizarse cuatro reuniones en Ginebra, se celebraron reuniones regionales, se recogieron aportaciones de los Estados Miembros, y se facilitaron dos audiencias públicas virtuales. La participación de los gobiernos y de la sociedad civil de América Latina y

el Caribe en esta negociación ha sido muy importante. Sin duda, la más importante contribución de la región ha sido el "Documento de Río"⁴, una alternativa al proyecto de estrategia mundial preparado por la Secretaría de la OMS, apoyado por más de 18 países y que fue elaborado en dos consultas sub-regionales en Bolivia y Brasil durante el verano del 2007. El Documento de Río se convirtió en parte del texto en negociación y muchas de sus propuestas conforman el documento final.

Análisis del resultado

La estrategia mundial y el plan de acción consta de un documento de más de 50 páginas que sería imposible resumir en este artículo. Por ello, a continuación se destacan sólo algunas de las acciones más representativas que fueron acordadas.

Promover la competencia genérica

Reconociendo que promover la competencia genérica es una de las políticas públicas más efectivas para garantizar el acceso a los productos de manera sostenible, el documento contiene diferentes acciones para facilitar la producción y comercialización de medicamentos genéricos en países en desarrollo.

El documento reafirma los derechos consagrados en la Declaración de Doha respecto a utilizar las flexibilidades

contenidas en el Acuerdo sobre los ADPIC para proteger la salud pública y promover el acceso a los medicamentos para todos. Pero va más allá incluyendo flexibilidades contenidas en otros acuerdos internacionales y mencionando expresamente la posibilidad de utilizar el derecho de la competencia como mecanismo para corregir prácticas anticompetitivas.

El documento también contiene la posibilidad de crear nuevos mecanismos para facilitar la gestión de licencias y asegurar un

mercado competitivo de productos genéricos. Por ejemplo, se incluye un mandato para estudiar la viabilidad de la gestión colectiva de la propiedad intelectual a través de la constitución de pools o carteras comunes de patentes. La reciente decisión de UNITAID de crear un pool de patentes para medicamentos del SIDA debería servir de inspiración al resto de Estados Miembros pues es claramente un importante paso en la dirección de cambiar la forma en que se garantiza el acceso al conocimiento en condiciones no discriminatorias, razonables y asequibles⁵.

Redefinir el sistema de financiamiento e incentivo a la innovación médica

La resolución 61.21 parte del reconocimiento, ya contenido en el informe de la CIPIH, de que el actual sistema de incentivo a la innovación médica ha fracasado pues no ha respondido a las necesidades de salud, especialmente de los países en desarrollo, donde se carece de un mercado rentable para los productos de la innovación.

No existe suficiente investigación y desarrollo, y las pocas innovaciones que se estimulan, mayoritariamente para enfermedades que afectan a los países desarrollados, se comercializan a un precio demasiado elevado para ser asequibles de manera sostenible para pacientes y gobiernos.

La clave del problema se encuentra en que los actuales mecanismos de incentivo a la innovación vinculan la recuperación del coste de la innovación con el precio de los productos resultantes. El sistema se basa en el otorgamiento de derechos exclusivos, como las patentes, a los que introducen un producto nuevo en el mercado, permitiendo a sus titulares temporalmente eliminar o restringir la competencia e imponer precios muy por encima del coste de fabricación.

Para muchos, la solución a los problemas de acceso e innovación se encuentra en la búsqueda de nuevos sistemas de incentivo a la innovación que diferencien el mercado de la innovación del mercado de los productos. Asimismo, que permitan la recuperación de los costes de la innovación con mecanismos que no restrinjan la competencia genérica ni el acceso a los conocimientos científicos.

En este sentido, la resolución 60.30⁷ adoptada por los Estados Miembros de la OMS significa un paso importante, pues incluye una solicitud a la OMS para que aliente la formulación de propuestas relativas a mecanismos de incentivos en los que se afronte la vinculación entre los costos de investigación y desarrollo, y el precio de los productos.

En tal sentido, existen diferentes propuestas de nuevos mecanismos de incentivos. Algunos expertos y organizaciones, incluido Knowledge Ecology Internacional, han abogado por la idea de estimular y financiar la investigación y el desarrollo de tecnologías médicas a través de premios económicos, en lugar de precios y monopolios⁸. La idea de otorgar premios para estimular innovación no es nueva⁹, pero la propuesta de crear un sistema sostenible de incentivos a la innovación, el cual convierta a las patentes en un derecho a ser remunerado en lugar de un derecho a excluir la competencia, puede ser revolucionaria. En Estados Unidos existe una propuesta de ley en el Senado para iniciar un debate en esta dirección, y el que ha recibido reacciones positivas por parte de representantes de consumidores y varios expertos¹⁰.

En cumplimiento al mandato de la resolución 60.30, los gobiernos de Barbados y Bolivia presentaron durante la negociación del IGWG, cinco propuestas de premios de estímulo a la innovación¹¹:

- Premio para un test de diagnóstico de la tuberculosis.
- Premio para nuevos tratamientos contra el chagas.
- Premio para medicamentos prioritarios y vacunas, para enfermedades de tipo II, III, antibióticos y amenazas emergentes.
- Premio para nuevos tratamientos contra el cáncer.
- Premio para mercados apoyados por donantes. Esta propuesta consiste en vincular un sistema de premios a acuerdos de licencia voluntarios que autoricen el suministro competitivo de medicamentos genéricos.

"facilitar la producción y comercialización de medicamentos genéricos en países en desarrollo"

Estas propuestas merecen la consideración de la OMS y sus Estados Miembros pues representan cinco posibles diferentes implementaciones del concepto de premios a la innovación. Algunas propuestas son voluntarias, otras obligatorias, algunas son específicas para una enfermedad o necesidad de salud, otras son más ambiciosas, pero todas tienen en común el representar un nuevo modelo de fomento a la innovación que garantizaría un retorno a la inversión. Lo anterior permitiría una competencia genérica desde que el producto es aprobado por las autoridades sanitarias.

Además, reconociendo que el sistema actual no facilita ni promueve el intercambio de conocimientos científicos que es necesario para mejorar las capacidades de innovación y producción local en los países en desarrollo, las propuestas también contienen incentivos para garantizar una ciencia más abierta. Esto, por ejemplo, alentando a los investigadores a compartir sus resultados y enviar a bases de datos online y de libre acceso sus publicaciones.

Reafirmar y ampliar el mandato de la OMS

En cumplimiento con la Constitución de la OMS que establece que la finalidad de la institución es "alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud", y del mandato contenido en diversas resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud, los Estados Miembros han acordado que la OMS desempeñe una función estratégica y central en la relación entre la salud pública, la innovación y la propiedad intelectual. Además, pide fortalecer sus competencias y programas institucionales en la materia.

En la práctica esto no sólo debería traducirse en una asistencia técnica a los gobiernos en la utilización de las flexibilidades contenidas en el Acuerdo sobre los ADPIC y otros acuerdos internacionales, sino que también debería incluir la promoción de la capacidad de innovación tecnológica. Lo anterior para facilitar que propuestas teóricas, como las presentadas por Barbados y Bolivia, puedan convertirse en una realidad.

El futuro

Después de más de dos años de negociación, la OMS y sus Estados Miembros disponen ahora de un excelente acervo de acciones específicas que pueden no sólo mejorar el acceso a los productos sanitarios existentes sino cambiar el actual modelo de negocio y de ciencia para facilitar la innovación en tecnologías médicas asegurando al mismo tiempo un acceso equitativo a los frutos de estas.

La siguiente etapa consiste en finalizar el plan de acción, que debe ser completado por la OMS y presentado a la próxima Asamblea Mundial de la Salud. Paralelamente, la Directora General debe preparar un programa de inicio rápido y empezar a aplicar de inmediato los elementos cuya ejecución incumbe a la OMS.

El elemento 8 de la estrategia mundial introduce un programa de seguimiento y evaluación que incluye informar periódicamente de los progresos en la implementación. Por consiguiente, se prevé, que la negociación sobre la implementación que empezará en los próximos meses, será seguida con detenimiento por los Estados Miembros y el resto de partes interesadas.

Asimismo, se ha acordado el establecimiento, con carácter urgente, de un grupo de expertos para que examine la actual financiación y coordinación de las actividades de investigación y desarrollo, así como propuestas de fuentes nuevas e innovadoras de financiación para estimular dichas actividades, incluyendo la consideración de propuestas de los Estados Miembros. Reconociendo que parte del mandato del IGWG ha sido incumplido al no haberse estimado las necesidades de financiación para la investigación y desarrollo esencial, ni establecido un marco sostenible de financiamiento, cabe ahora esperar que este grupo de trabajo sea ambicioso en su agenda de trabajo.

Finalmente, es también esencial destacar el consenso acordado en continuar las discusiones respecto a un nuevo tratado en investigación y desarrollo biomédico. La propuesta consiste en reconocer obligaciones mundiales en el financiamiento e incentivo de la innovación médica, pero adaptando estas obligaciones al nivel de desarrollo del país, y otorgando flexibilidad a los gobiernos en el tipo de innovación que quieren apoyar y el método para cumplir con esas obligaciones, incluso permitiendo sustituir las obligaciones de otorgar derechos exclusivos. La OMS y sus Estados Miembros deberían continuar liderando este proceso de reforma e iniciar cuanto antes las conversaciones para analizar qué objetivos y elementos debería incluir un tratado de estas características.

"la resolución 60.30 significa un paso importante"

* Abogada del Knowledge Ecology International (KEI)

1 La resolución WHA61.21 con la estrategia mundial y el plan de acción está disponible en: http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/A61/A61_R21-sp.pdf

2 El informe CIPIH está disponible en varios idiomas en: <http://www.who.int/intellectualproperty/report/en/>

3 La resolución WHA59.24 está disponible en: http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA59/A59_R24-sp.pdf

4 El Documento de Río está disponible en: http://www.who.int/phi/public_hearings/second/regional_consultations/Sub-regional_Consensus_Document.pdf

5 El comunicado de prensa de UNITAID está disponible en: <http://www.unitaid.eu/en/NEWS/UNITAID-moves-towards-a-patent-pool-for-medicines.html>

6 Para más información visiten la página de KEI sobre patent pools: http://www.keionline.org/index.php?option=com_content&task=view&id=63

7 La resolución WHA 60.30 está disponible en: http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA60/A60_R30-sp.pdf

8 Varios economistas y expertos en salud pública han escrito sobre premios como recompensa a la innovación. Para un resumen, ver la observación presentada por James Love de KEI en la segunda audiencia pública y disponible en: http://www.who.int/phi/public_hearings/second/contributions_section2/Section2_JamesLove-KEI_prizes.pdf

9 Selected Innovation Prizes and Reward Programs, KEI Research Note 2008:1 (March 2008). Disponible en: http://www.keionline.org/misc-docs/research_notes/kei_rn_2008_1.pdf

10 Comentarios a la propuesta de ley S.2210 (Medical Innovation Prize Fund Act of 2007). Disponible en: http://www.keionline.org/misc-docs/Prizes/experts_on_s2210.pdf

11 En espera que sean incluidas en la página web de la OMS, las propuestas de Barbados y Bolivia están ya disponibles en la página web de KEI: http://www.keionline.org/index.php?option=com_content&task=view&id=3

Propiedad intelectual y acceso a tecnologías ambientales

Vanessa Lowenstein*

El debate que se lleva a cabo en el Comité de Comercio y Medio Ambiente (CCMA) de la OMC sobre el párrafo 31 iii) del Mandato de Doha debería considerar el impacto de la propiedad intelectual en el acceso y difusión de las tecnologías ambientales. El uso de estas tecnologías reduciría ampliamente la emisión de los gases que causan efecto invernadero. Sin embargo, el alcance del sistema de patentes y las distintas modalidades de acceso a mercados que se están negociando en el marco de este apartado, podrían causar un escenario que dificulte aún más el acceso y la difusión de tecnologías "limpias" por parte de los países en desarrollo. Este artículo presenta alternativas de modalidades que se podrían utilizar dentro de esa negociación.

Propiedad intelectual, ambiente y acceso a mercados

La regulación en materia ambiental y sobre propiedad intelectual genera estándares de protección y acceso a mercados. Los derechos de propiedad intelectual (DPI) y las patentes en particular, crean un derecho exclusivo de explotación para el titular sobre el invento -producto o proceso- en un territorio determinado durante un periodo determinado. De esa forma quien la detenta es el único oferente en ese mercado y ello indefectiblemente causa un escenario en el cual, ante la ausencia de competencia, los productos o servicios se ofrecen a precios más altos.

Por su parte los estándares ambientales también crean condiciones de acceso a mercados, así como beneficios (por ejemplo fiscal o arancelario) para quien produzca o comercialice ese tipo de bienes o servicios.

La principal diferencia entre estos dos estándares radica en la cantidad de productores que se benefician con el mejor acceso a mercados. En el caso de las patentes, se otorga la exclusividad a su titular en el acceso o fabricación de un determinado producto o servicio. En cambio, en el caso de los bienes ambientales, se brinda preferencia de acceso o fabricación de servicios a cualquiera que cumpla con las condiciones de esa materia. Es en la acumulación de estos estándares -ambiental y de propiedad intelectual- que se maximizan los beneficios de acceso para ciertos actores, y se dificulta o impide el acceso para otros.

Modalidades de reducción arancelaria y no arancelaria

Hasta ahora el debate dentro del CCMA está centrado en tres enfoques: 1) definición de lo que se considera como "bienes y servicios ecológicos" o "bienes y servicios ambientales"; 2) elaboración de listas nacionales o multilaterales de los bienes y servicios susceptibles de ser incorporados en dicha categoría; y 3) un proyecto integrador compuesto por proyectos nacionales ambientales. No obstante, más allá del enfoque que prevalezca, el resultado final de la negociación estará limitado por las modalidades que se establezcan como criterio para reducir o eliminar los obstáculos arancelarios y no arancelarios a los bienes y servicios ambientales. El mayor o menor acceso a mercados estará condicionado por las siguientes modalidades:

a) Modalidades para obstáculos arancelarios

- Lista viva vs. lista muerta, es decir, una lista dinámica que permite incorporar y eliminar bienes o servicios (viva), y otra fija.
- Número máximo de productos.
- Establecer un límite determinado en valor.

- Trabajar con la eliminación de aranceles diferenciados según el grado de desarrollo.
- Eliminación gradual de aranceles, en cuyo caso se podría convenir la posibilidad de conceder plazos más largos para la eliminación gradual, producto por producto y país por país.

b) Modalidades para obstáculos no - arancelarios

Existen distintos obstáculos no arancelarios sobre los que también se podría trabajar en la negociación, pero que no se analizan en este artículo. Entre ellos están los subsidios, los obstáculos técnicos, y el establecimiento de diversos estándares de seguridad, sanitarios, laborales y hasta ambientales que aplican los países como condición para el acceso a sus mercados.

Propiedad Intelectual

En el contexto competitivo actual es habitual que la tecnología más novedosa para ajustarse a una norma técnica sea una tecnología patentada. Si dicha tecnología se incorpora en una norma sin el consentimiento del titular de la patente para que se compartan sus derechos, el titular será la única entidad capaz de cumplir con dicha norma o condiciones.

A partir de este escenario surgen algunas preguntas: ¿Debe incorporarse una tecnología (invención) protegida por DPI en una norma técnica o en una lista de bienes? ¿Deben las empresas que desean adoptar una norma obtener una licencia del titular de los derechos o de la patente? En tal caso, ¿en qué términos deben hacerlo? ¿Tienen las empresas implicadas en el proceso de establecimiento de normas la obligación de divulgar información sobre sus patentes o solicitudes de patente a los demás miembros del comité encargado del establecimiento de normas? ¿Qué sucede si el titular o titulares de la patente se niegan a conceder licencias para el uso de la tecnología patentada?

Evidentemente no sería productivo adoptar una reducción o eliminación no-arancelaria para un determinado producto si el titular de DPI puede bloquear su aplicación al negarse a conceder una licencia o exigir regalías tan elevadas que hagan imposible su acceso, difusión y adopción. Frente a esta situación surgen algunos escenarios:

- a) Si se concediera una reducción o eliminación, la misma podría estar condicionada a la *no protección por patente* de dicho bien en el territorio que reduce el arancel. De esta forma, los beneficios de acceso serían no acumulativos, ya que de lo contrario, si se sumara la mejora arancelaria a la exclusividad comercial de los DPI, el acceso sería privilegiado y los importadores no tendrían ningún beneficio. Además, si el objetivo de la reducción arancelaria es el mayor acceso y el menor costo del bien ambiental, la patente terminaría anulando tal beneficio dado que, al inhibir la competencia, quien la detenta podría fijar precios; o

- b) en caso que se optara porque el bien continuara gozando de protección de propiedad intelectual, se podría exigir la licencia para producir el bien ambiental en el territorio de destino a cambio de una regalía determinada¹. Esta opción presenta la ventaja de difundir y hacer efectiva la transferencia de las tecnologías ambientales; o
- c) se podría condicionar la reducción o eliminación a la fabricación del producto en el territorio nacional, lo que anularía el beneficio.

Transferencia de Tecnología

Otra modalidad de obstáculo no arancelario sobre la que se podría trabajar es la de condicionar la reducción o eliminación de barreras a la transferencia efectiva de tecnología. La estrategia podría girar en torno a la creación de capacidades endógenas para producir esos productos en el territorio nacional

Algunos países en desarrollo han señalado la necesidad de aclarar los vínculos entre el comercio de bienes ambientales y la transferencia de tecnologías ecológicamente racionales. Las cuestiones relativas a la transferencia de tecnología se pueden ver conjuntamente con los incentivos establecidos en el párrafo 2 del artículo 66 y en el artículo 67 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), extendiendo las disposiciones sobre transferencia (no sólo a los países menos adelantados como establece el artículo 66.2) a los países en desarrollo. El Grupo de Trabajo sobre Comercio y Transferencia de Tecnología podría examinar la relación entre el comercio de bienes ambientales y la transferencia de tecnologías no contaminantes.

Finalmente, se podría trabajar para que la implementación de licencias obligatorias de las tecnologías ambientales se aplique de manera tal que la fabricación en el territorio donde se reducen los aranceles y se conceden los DPI condicione el ejercicio de esos beneficios.

En ambos casos las modalidades deben considerar:

- a) El principio de no reciprocidad plena: Debido a las diferencias estructurales entre los países desarrollados y los países en desarrollo, el objetivo es evitar que la reducción arancelaria traiga como consecuencia un fuerte incremento en las exportaciones de bienes ambientales de los países desarrollados hacia los países en desarrollo, y apenas un leve incremento de las exportaciones en sentido inverso.
- b) Trato especial y diferenciado: Intenta considerar las disparidades existentes entre los países. A través de él se podría otorgar un trato especial a los países en desarrollo, por ejemplo, reduciendo en mayor medida los aranceles de importación de los bienes ambientales de los países desarrollados; o reduciendo en forma más gradual los aranceles de importación de los bienes ambientales de los países en desarrollo.
- c) Reciprocidad cruzada: También sería posible realizar concesiones cruzadas con el objeto de proteger a los sectores más sensibles para un determinado país, y conceder rebajas arancelarias en aquellos bienes que poseen mayor participación en el comercio mundial. En este sentido, sería interesante considerar la protección de los bienes agrícolas o agroindustriales de alto consumo interno, de manera que la reducción arancelaria no traiga como consecuencia un sustancial incremento de las importaciones, y por lo tanto, la posible destrucción de la producción nacional.

Ronda de Doha

La característica distintiva de Doha es el compromiso asumido por los Miembros de la OMC de lograr que las normas

comerciales multilaterales y la liberalización del comercio apoyen el proceso de desarrollo. Los ejes sobre los que se sostiene el Mandato de Doha son una oportunidad única para conjugar los temas comerciales con los de ambiente y desarrollo. Privilegiar sólo uno de los tres ejes en detrimento de otro, no haría más que incrementar la brecha de desarrollo entre países desarrollados y países en desarrollo, contrariando el objetivo principal de la Ronda.

Para que el proceso sea completo e integrador y permita socializar el acceso a las tecnologías limpias, debe considerarse particularmente el efecto que los DPI tienen en el uso, difusión y comercialización de las innovaciones ambientales. Modalidades tales como licencias, ya sea voluntarias, obligatorias o con umbrales de regalías pre-establecidos para las tecnologías limpias, son elementos a tomar en cuenta cuando la reducción o eliminación de barreras comerciales se produzca sobre productos o procesos patentados.

Otros elementos para la gestión del acceso a mercados sobre productos ambientales protegidos por patente son: i) La fabricación local del producto. Si la modalidad fuera acumular beneficios obteniendo mejor acceso por la exclusividad de comercialización del DPI sumado a la mejora en el acceso consecuencia de tratarse de un bien ambiental, se podría condicionar esta acumulación a la fabricación nacional del producto. De esta forma, con la fabricación en el territorio local se produce indirectamente un flujo de transferencia de tecnología, creando *know how*, capacidad productiva y mano de obra calificada; o ii) La no acumulación de beneficios ambientales y de DPI sobre un mismo producto.

El párrafo 32 de la Declaración de Doha encomienda a los Miembros que al cumplir su mandato consideren particularmente: "i) el efecto de las medidas medioambientales en el acceso a los mercados, especialmente en relación con los países en desarrollo, [...] y aquellas situaciones en que la eliminación o reducción de las restricciones y distorsiones del comercio pueda beneficiar al comercio, al medio ambiente y al desarrollo; ii) las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC...". Es en cumplimiento de esta disposición, y de lo dispuesto en el párrafo 31, que las modalidades propuestas sobre propiedad intelectual y transferencia de tecnología toman especial relevancia en el tratamiento de temas ambientales. El objetivo es socializar los costos y beneficios de una negociación cuyos ejes son el comercio, el medio ambiente y el desarrollo, a la vez que se propicia la implementación de las flexibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC.

¿Cómo implementarlo?

La propuesta se podría implementar a través de una declaración que deje claro el vínculo entre la propiedad intelectual y el acceso a las tecnologías ambientales, y que exprese que las medidas propuestas son consistentes con el Acuerdo ADPIC.

En paralelo, el mismo tema debería plantearse dentro del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático como uno de los puntos del Plan de Acción de Bali. En ese foro también se comenzó a discutir el vínculo entre la propiedad intelectual y las tecnologías ambientales, encontrándonos frente a la oportunidad única de fortalecer la interacción de ambas negociaciones al propiciar la utilización de las flexibilidades del sistema de patentes para el acceso y desarrollo local de tecnologías "limpias".

* Abogada, investigadora del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Económico de la Universidad de Buenos Aires, quien se desempeña en el Gabinete Científico y Tecnológico del Ministerio de Ciencia, Técnica e Innovación Productiva.

¹ John Barton propone establecer un sistema de licencias obligatorias para eliminar las barreras de acceso. Ver, *Biores Trade and Environment Review*, Año 1, No. 2, diciembre 2007, disponible en www.ictsd.org

Las subvenciones no-agrícolas en la OMC: consideraciones para la negociación

Pablo Klein Bernard*

En materia de subvenciones agrícolas, la Ronda de Doha ya ha producido un resultado temprano e importante, que es el compromiso por parte de los países desarrollados de eliminar todas las formas de subvenciones a la exportación para el año 2013¹. Esto además de las reducciones proyectadas en los apoyos internos como parte de lo que se está negociando. En materia de subvenciones no-agrícolas, la situación actual en la negociación de normas no es tan clara, exceptuando lo que se propone para el sector de pesca. El objetivo de este artículo es examinar qué tan bien han funcionado las disciplinas negociadas durante la ronda Uruguay en materia de subvenciones no-agrícolas, y explorar algunas posibles mejoras, mas allá de lo que está sobre la mesa de negociación en este momento.

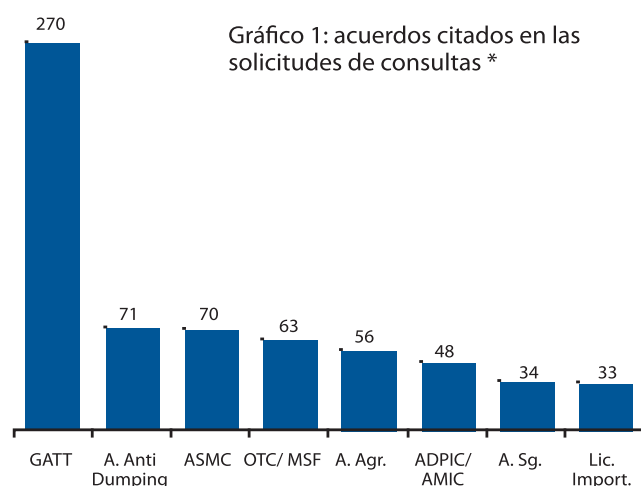
El Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMC)

Las disciplinas del ASMC se aplican a las políticas y acciones de los gobiernos definidas en el primer artículo² que otorguen un beneficio y que sean específicas para ciertas empresas o ciertas industrias. Las subvenciones que cumplan con las condiciones anteriores se pueden clasificar en dos categorías, según el nivel de disciplinas que se les aplican:

- I. **Subvenciones prohibidas:** Las subvenciones supeditadas *de jure o de facto* a los resultados de exportación y las subvenciones supeditadas al empleo de productos nacionales con preferencia a los importados están prohibidas por el ASMC. Estas subvenciones siempre se consideran específicas y no se requiere demostrar que causan *efectos desfavorables*³.
- II. **Subvenciones recurribles:** Todas las demás. Un Miembro puede tomar medidas en contra de estas subvenciones solamente si demuestra que éstas causan *efectos desfavorables*. Las acciones que puede tomar un Miembro incluyen la impugnación bajo el Entendimiento de Solución de Diferencias (ESD) y la imposición de derechos compensatorios⁴ a las importaciones de productos subvencionados.

Las subvenciones en solución de diferencias⁵

Desde el inicio de la OMC, el ASMC ha sido uno de los acuerdos más contenciosos, ubicándose en tercer lugar después del propio GATT y del Acuerdo de Antidumping por el número de veces que han invocado en procedimientos de solución de diferencias (ver gráfico 1⁶).



* Número de veces que cada acuerdo de la OMC ha sido invocado en las solicitudes de consultas, fuente: Horn y Mavroidis (2008)

Cuando en un procedimiento de solución de diferencias se concluye que una subvención está prohibida bajo el ASMC, si ésta no es eliminada en el plazo determinado, puede ser objeto de *contramedidas apropiadas* por parte del Miembro reclamante. Dichas contramedidas generalmente adoptan la forma de aranceles más elevados. Normalmente se recurre a un arbitraje entre el Miembro reclamante y el Miembro que mantiene la medida inconsistente para fijar el nivel de las *contramedidas*. Los niveles monetarios de las *contramedidas* que se han fijado en las diferencias sobre subvenciones pueden verse en la tabla 1 y compararse con las cantidades fijadas en los demás casos (ver tabla 1). En el caso del ASMC se han alcanzado montos más elevados, posiblemente por las particularidades del concepto de *contramedidas apropiadas* del ASMC⁷, pero también por el impacto de las subvenciones en el comercio.

El recurso a los derechos compensatorios

A diferencia del uso de solución de diferencias, el recurso por los Miembros a los derechos compensatorios ha sido muy limitado, especialmente si se le compara con el recurso a los derechos antidumping (ver gráfico 2). Esto puede ser porque los derechos compensatorios están diseñados para contrarrestar políticas y acciones bien delimitadas, mientras que los derechos antidumping son aplicables en un universo mucho más amplio de circunstancias (incluyendo las subvenciones). Además, la obligación de demostrar y cuantificar la existencia de estas políticas o acciones de los gobiernos extranjeros ha sido muy onerosa para las industrias domésticas y las autoridades investigadoras⁸. El hecho de que más de la mitad de los Miembros de la OMC no cumple con la obligación de notificar sus subvenciones agrava esta situación (ver gráfico 3).

Otra posible razón por la que no se imponen tantos derechos compensatorios como derechos antidumping es la propia política de las subvenciones. En el caso de los derechos compensatorios, son medidas que adoptan las autoridades de un país contra políticas de otro país, mientras que en el caso de los derechos antidumping se trata de acciones de las autoridades de un país contra particulares en el extranjero. Las autoridades finalmente son parte del gobierno, y pueden estar reacias a atacar las políticas de otros países por diferentes razones (política exterior, acuerdos, entre otros); o porque el gobierno del país que impondría los derechos tiene programas similares a los que está contrarrestando; o en caso de no tenerlos, no quiere afectar su espacio de políticas.

Tabla 1: Niveles de contramedidas fijados por los arbitrajes bajo el artículo 4 del ASMC, comparado con otros arbitrajes bajo el artículo 22 del ESD

	Fecha del laudo arbitral	Monto Millones de US dólares por año*
Diferencias sobre subvenciones:		
Brasil-Aeronaves (Canadá) (DS46)	28/08/2000	232.5
EE.UU. - FSC (CE) (DS108)	30/08/2002	4,043
Canadá-Aeronaves II (DS222)	17/02/2003	247.7
Otras diferencias:		
CE-Hormonas (EEUU, Canadá) (DS26,48)	12/07/1999	124.4***
CE- Banano (EEUU) (DS27)	09/04/1999	191.4
CE- Banano (Ecuador) (DS27)	24/03/2000	201.6
EEUU - Copyright (CE) (DS160)**	09/11/2001	1.1
EEUU - "Enmienda Byrd" (DS217,234)	31/08/2004	190****
EEUU- Apuestas (Antigua) (DS285)	21/12/2007	21

Fuente: OMC, Laudos arbitrales.

* Los montos otorgados en monedas distintas fueron convertidos a dólares EEUU utilizando el tipo de cambio vigente en la fecha del laudo.

** Arbitraje bajo el artículo 25 del ESD

*** Monto total (EEUU + Canadá).

La disputa sobre la Enmienda Byrd tuvo como reclamantes a Brasil, Canadá, Chile, CE, India, Japón, Corea y México. El monto otorgado por el laudo arbitral fue el monto de los derechos antidumping recolectados y distribuidos a las empresas solicitantes en cada caso, multiplicado por un coeficiente de 0.76. El monto estimado se basa en las distribuciones correspondientes al año fiscal 2004.

La negociación de normas sobre subvenciones

En noviembre del 2007 el presidente del Grupo de Negociación de Normas, Guillermo Valles Galmés, Embajador de Uruguay, presentó los textos refundidos de los acuerdos de antidumping y de subvenciones y medidas compensatorias⁹. La parte relativa al ASMC incluye cambios a las disciplinas a las subvenciones prohibidas y recurribles y un nuevo anexo sobre pesca, dejando el trabajo técnico de extrapolar las nuevas disciplinas para los derechos antidumping al contexto de los derechos compensatorios para una etapa más avanzada de la negociación.

Entre los elementos principales que busca clarificar el texto refundido del ASMC están:

- los lineamientos para determinar cuándo una subvención otorga un beneficio, y con respecto a qué punto de referencia debe medirse en el mercado.
- el cálculo del beneficio cuándo el gobierno suministra bienes y servicios a precios reglamentados.
- la existencia de un beneficio el caso en que el gobierno proporciona préstamos a través de instituciones financieras que incurren en pérdidas a largo plazo.
- el tratamiento de los créditos a la exportación depende del beneficio para el receptor en lugar del costo para el gobierno, buscando con esto que el acuerdo no sea más restrictivo para los Miembros en desarrollo ya que tienen costos de financiamiento más altos.

El texto del ASMC intenta clarificar otros aspectos que han sido objeto de fallos previos del Órgano de Apelación, tales como la transferencia de una subvención que se otorga a un insumo utilizado en la producción de otro bien.

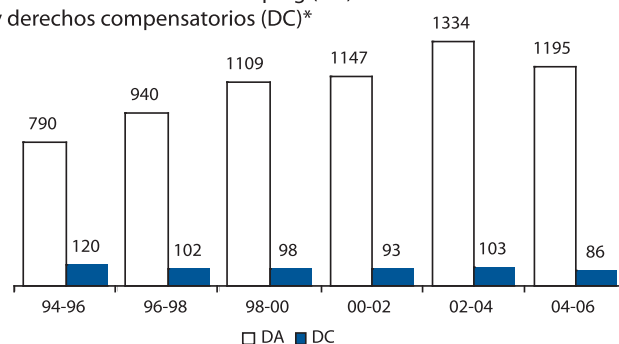
En materia de subvenciones a la pesca, las nuevas disciplinas responden a los problemas particulares del sector como la sobreexplotación de los recursos pesqueros comunes. En particular, se prohíben los apoyos que contribuyen a aumentar la capacidad y la utilización de las flotas pesqueras, con excepciones importantes para los países en desarrollo y los países menos adelantados, y se incluyen obligaciones tales como la implementación de regímenes de ordenamiento pesquero.

Consideraciones para la negociación

En el texto refundido del ASMC, que es la base para la negociación de normas de la Ronda de Doha, se incluyen nuevas disciplinas sustanciales específicamente para la pesca, además de algunas clarificaciones y mejoras que afectarían a las subvenciones prohibidas y recurribles que se otorgan en todos los sectores. Sin embargo, se espera también que las disciplinas negociadas para el acuerdo antidumping sean eventualmente extrapoladas a las investigaciones por derechos compensatorios hasta donde sea relevante. Esto último hará que la imposición de los derechos compensatorios sea todavía más difícil de lo que es actualmente, lo que implica aún menor disciplina para las subvenciones recurribles.

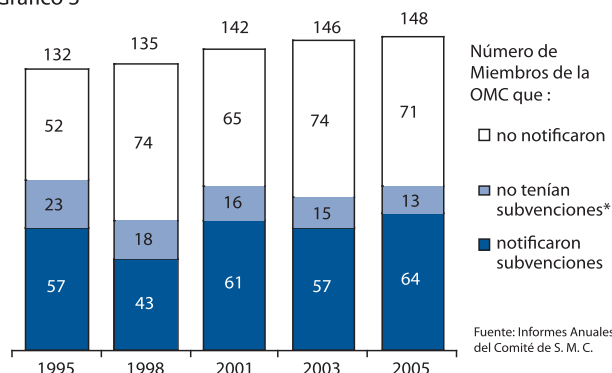
Hay varias maneras en que se podrían mejorar las disciplinas actuales, como ampliar la categoría de subvenciones prohibidas y reactivar la presunción de perjuicio grave (que expiró en 1999). Otra avenida que no se ha explorado es considerar que los derechos compensatorios no tienen las mismas implicaciones para el comercio mundial que los derechos antidumping, lo cual implica tal vez disciplinas menos fuertes para los primeros, y más fuertes para los segundos. Otro paso importante sería reforzar los incentivos para que los Miembros notifiquen todas sus subvenciones específicas, por ejemplo penalizando el incumplimiento o facilitando la notificación¹⁰.

Gráfico 2: derechos antidumping (DA) y derechos compensatorios (DC)*



* Derechos en vigor, promedio de dos años contados de julio a junio.
Fuente: Informes de los Comités de la OMC

Gráfico 3



Fuente: Informes Anuales del Comité de S. M. C.

En un mundo sin barreras al comercio ni a la inversión, cualquier subvención otorgada por un gobierno que tenga algún impacto en la economía local tendrá efectos en productores y consumidores de otros países, lo cuales no fueron tomados en cuenta a la hora de diseñar la subvención. Esto crea ineficiencias en la medida que los gobiernos adoptan políticas óptimas a nivel nacional que acaban siendo perjudiciales a escala mundial. Las disciplinas multilaterales permiten reducir esas ineficiencias pero requieren que los gobiernos se pongan de acuerdo en limitar el universo de las acciones y políticas que podrán adoptar¹¹.

El apoyo del público para el libre comercio depende de que haya una percepción de que las reglas del comercio internacional son (al menos razonablemente) justas¹². Esto implica disciplinas más efectivas para lograr condiciones de competencia más equitativas entre productores basados en distintas jurisdicciones.

Si la Ronda de Doha concluye con éxito, tendremos una reducción importante en las barreras al comercio de bienes y servicios. Bajo ese escenario, se puede esperar que las disciplinas en materia de subvenciones reciban mayor atención en el futuro.

* Consejero Económico en la Misión Permanente de México ante la OMC y anterior presidente del Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC. Correo electrónico pklein71@gmail.com.

¹ Párrafo 6 de la Declaración Ministerial de Hong Kong (diciembre de 2005).

² La definición legal de *subvención* incluye (entre otros) las transferencias directas como los préstamos, las ventajas fiscales, la oferta de bienes o prestación de servicios por parte del gobierno o la compra de bienes por el gobierno, los apoyos indirectos otorgados a través de entidades privadas.

³ Los *efectos desfavorables* incluyen el daño a la industria doméstica, el perjuicio grave a los intereses exportadores de un Miembro y la anulación o menoscabo de sus beneficios bajo el GATT 1994.

⁴ Esta segunda opción se aplica sólo en el caso en el que la subvención causa daño a la industria doméstica del Miembro que impone el derecho compensatorio.

⁵ Una buena explicación, aunque no actualizada, de las principales diferencias sobre subvenciones puede encontrarse en Clough (2002), "Subsidies and the WTO Jurisprudence", *International Trade Law Review*, número 4, pp. 109-117.

⁶ ver Horn y Mavroidis (2008), "The WTO Dispute Settlement System 1995-2006: Some Descriptive Statistics", Research Inst. of Industrial Economics Working Paper #740.

⁷ El ASMC usa el término *contramedidas*, mientras que el Entendimiento de Solución de Diferencias usa el término "suspensión de concesiones u otras obligaciones". En el último caso se refiere a la afectación que correspondería al reclamante, mientras que en caso de las *contramedidas* el concepto se ha referido al efecto total de la subvención.

⁸ Por ejemplo cuando tienen que recolectar información de agencias de gobierno locales del otro lado del mundo, o traducir legislación compleja desde otros idiomas.

⁹ Ver el documento de la OMC con clave TN/RL/W/213 del 30 de noviembre del 2007.

¹⁰ Por ejemplo existe un proyecto de formato de notificación simplificado, ver Thöne (2008), "Assessing German Subsidies under the GSI-Subsidies Template proposed for the WTO", The Global Subsidies Initiative of the International Institute for Sustainable Development, disponible en el sitio web: http://www.iisd.org/pdf/2008/wto_subsidies_germany.pdf

¹¹ Esta idea proviene de la teoría de los acuerdos comerciales, ha sido aplicada por diferentes autores en varios contextos, por ejemplo ver Feenstra (2004), "Advanced International Trade", Princeton University Press, Capítulo 9

¹² Esta idea ha sido expresada en la conclusión de Magnus, John R. (2004) "World Trade Organization Subsidy Discipline: Is this the "Retrenchment Round"?", *Journal of World Trade* 38(6), pp. 985-1047

Migración y desarrollo: oportunidades y desafíos

Dulce María Valle Álvarez*

Entre los desafíos del siglo XXI y de la globalización, destaca el fenómeno migratorio con sus múltiples factores de carácter económico, social, cultural, histórico, demográfico, tecnológico y psicológico. Mucho se habla y se escribe sobre los flujos migratorios, sobre sus consecuencias, sobre sus implicaciones para la seguridad y el empleo; pero poco o nada se dice de sus causas, principalmente las socioeconómicas, y de sus vínculos con el desarrollo, aspectos que interesan para el objetivo del presente ensayo. ¿Cómo evitar los enfoques parciales que prevalecen hasta el momento?

Consideraciones importantes

Frente a la complejidad del fenómeno hace falta una nueva visión sobre la migración internacional que ayude a la comprensión profunda y amplia sobre este fenómeno tan antiguo como la humanidad. Para ello se requiere un enfoque multidimensional que supere las políticas unilaterales centradas solamente en la noción de "control y gestión de la migración", y que promueva las contribuciones positivas de la migración al desarrollo.

Debemos comenzar por reconocer que la migración siempre existirá, cada vez de una manera más compleja, no solamente del sur al norte, sino también sur-sur, del norte al sur y al interior de los países. Es imposible detener la migración por decreto o por la imposición de muros porque hay países que necesitan trabajadores, y a su vez hay trabajadores que requieren oportunidades de empleo. Del mismo modo, los desastres naturales, el cambio climático, el aumento de los precios de los productos básicos, y la grave crisis alimentaria, son factores que seguramente propiciarán un aumento en los flujos migratorios durante los próximos años.

Los enfoques parciales que se siguen en algunos organismos que no pertenecen al sistema de las Naciones Unidas -Organización Internacional para las Migraciones, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la OMC, por ejemplo-, generan respuestas coyunturales que no necesariamente toman en consideración la importancia de promover el desarrollo de las comunidades de origen ni la responsabilidad compartida entre los países de origen y destino.

Organizaciones como la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), de clara vocación de combate a la pobreza, podrían contribuir, a través del análisis y la investigación, a construir consensos que permitan encontrar soluciones

“comprender mejor la contribución del migrante al desarrollo”

para disminuir las causas de la migración, y por ende, lograr flujos más ordenados.

En el Acuerdo de Accra, adoptado el 25 de abril de 2008 en el marco del 12° período de sesiones de la UNCTAD, la institución reconoció, mediante el análisis y las respuestas de política, que la comunidad internacional debe ir más allá del enfoque de “gestión de la migración” y adoptar una

orientación integral que considere las causas y los efectos de la migración, así como los retos que plantea para los Estados expulsores, receptores y de tránsito. Esta nueva perspectiva permitirá comprender mejor la contribución del migrante al desarrollo y dar respuestas de largo plazo dentro del mandato de la UNCTAD.

La relación entre migración y desarrollo

Es ampliamente reconocido el vínculo entre migración y pobreza. Mientras un número importante de personas no encuentre en su propio país un entorno económico y social que le permita su pleno desarrollo y bienestar e incentive su permanencia, habrá condiciones para emigrar. Lo importante entonces es buscar propiciar una migración por elección y no por necesidad. Por una parte, los acuerdos bilaterales de trabajadores temporales son una respuesta parcial frente a la magnitud del fenómeno. Por otra, favorecen a los prestadores de servicios y al personal calificado, sin reconocer que, en el caso de muchas regiones, como sucede en América Latina y el Caribe, un número considerable de migrantes son semi calificados o no calificados.

Un enfoque de desarrollo debe conceptualizar la relación migración-desarrollo en ambas direcciones, es decir, entre el país que expulsa y el que recibe; y reconocer que es un fenómeno global (expansión territorial). Hay efectos positivos y negativos en ambos sentidos: por una parte tenemos la fuga de cerebros que afecta seriamente a varias regiones, pero principalmente a África; por otra, tenemos el impacto que puedan tener las remesas en el desarrollo de las comunidades locales.

No se puede tener la concepción de los “efectos automáticos” que producen las remesas, dado que éstas son, al fin y al cabo, salarios que son transferidos a familias para su consumo. Las remesas son capital privado que pudiera orientarse, de manera concertada, al desarrollo de las comunidades de donde proceden los migrantes.

Las posibles soluciones pueden buscarse en la integración de los migrantes en las comunidades de destino, sin perder de vista que el respeto de sus derechos humanos es

fundamental para el desarrollo. Otra opción es la creación de un modelo integral de desarrollo cuya instrumentación esté sustentada en una estrategia de cooperación, tanto a nivel nacional como transnacional, y que permita atender adecuadamente las causas y los efectos económicos y sociales de la migración.

Es posible que en el marco de Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo que se celebrará en Filipinas en noviembre de este año, se pueda avanzar en una discusión integral del fenómeno migratorio, incluyendo el debate fundamental de los derechos humanos de los migrantes y su contribución al desarrollo. Pero nuevamente, el citado Foro no es una agencia especializada y el trabajo que realiza será de alcance limitado.

Por el momento no existe un foro único en las Naciones Unidas que atienda el tema en su totalidad. La Organización Internacional del Trabajo realiza una labor importante en el área de su mandato, mientras que la UNCTAD ha centrado su análisis en las negociaciones sobre servicios, particularmente el Modo 4, que se refiere al movimiento de personas físicas.

Después de Accra, la UNCTAD tratará de abordar la cuestión de una manera más amplia e integral, con análisis y respuestas de política. De igual manera, buscará trascender los enfoques parciales y respuestas coyunturales con la finalidad de adoptar una perspectiva que considere las causas y efectos de la migración y que sitúe al migrante, como persona, en el centro de toda política de desarrollo.

Asimismo, la institución debe ser capaz de identificar soluciones que tomen en cuenta a todos los migrantes, tanto calificados como no calificados. Esto porque existe una tendencia a privilegiar en el análisis o en posibles soluciones a la primera categoría sin considerar que la segunda (en gran medida indocumentada) es altamente demandada por los mercados de trabajo de destino.

Sobre este último aspecto debería insistirse en soluciones que reconozcan cabalmente las enormes necesidades de los mercados de destino y el impulso natural del fenómeno migratorio. También se deberían identificar soluciones viables (acuerdos de trabajadores temporales, migración circular u otro tipo de arreglos) a la altura de las circunstancias; y evitar la penalización y discriminación de los migrantes que responden al poder de atracción de las economías.

Análisis y respuestas de política

En los párrafos 56, 82 y 95 del Acuerdo de Accra los Estados miembros de la UNCTAD reconocieron la necesidad de que los países tomen en consideración la dimensión de la migración en las áreas de cooperación mundial, regional e interregional. El propósito es facilitar el diálogo, el intercambio de información y experiencia, sin olvidar la colaboración entre países de origen, tránsito y destino con el objeto de que se aprovechen plenamente los beneficios que aporta la migración a la comunidad mundial. Esto también fue reconocido en la Resolución de la Asamblea General 61/208, de diciembre de 2006, la que fue adoptada por consenso y que pide a todos los organismos y programas

de las Naciones Unidas que aborden, desde sus respectivos mandatos, el vínculo entre la migración y el desarrollo.

Con independencia del tipo de solución que finalmente se adopte, los hechos que no se pueden negar son los siguientes: En primer lugar, que hay un grupo muy grande de trabajadores en condiciones irregulares que por diversas razones ha emigrado para buscar un trabajo, llevando muchos de ellos a sus familias. En segundo, que existe un diferencial de salarios entre lo que aspiran percibir en el lugar destino y lo que pueden ganar en sus lugares de origen.

Regularizar la situación de los trabajadores indocumentados seguramente causaría presiones para que aumenten los costos laborales de las empresas, las que tendrían que ofrecer las prestaciones de ley, por lo que el salario neto de los trabajadores se vería reducido. De no darse una medida que regularice la situación, muy probablemente la situación general para los trabajadores sin documentos se mantendría igual en términos de salarios, empleo y costos laborales.

El flujo de personas que desea emigrar dependerá así del desempeño relativo de las economías. Si hay crecimiento en los países de destino, sobre todo en el sector industrial exportador, el número de trabajadores que demande la industria crecerá de tal forma que sería imposible detener el flujo migratorio. Aunado a ello, si el crecimiento en los países de origen no es sostenible, o se centra en actividades como la construcción, el comercio y los servicios de baja productividad, seguiremos viendo flujos migratorios, no debido a la falta de oportunidades, sino al diferencial de salarios.

"el 54% de los migrantes en América Latina son mujeres"

En los párrafos 122, 143 y 170 del Acuerdo de Accra se menciona que una gran proporción de los ingresos de los migrantes se gastan en los países de destino, y que éstos constituyen un importante estímulo a la demanda interna en las economías de esos países. Se sugiere también que la comunidad internacional tome medidas que permitan maximizar los beneficios que recaban las personas de las remesas enviadas por los migrantes a través de la reducción de los costos de transacción y un mejor acceso a servicios financieros para los migrantes y sus familias; todo ello sin dejar de respetar su carácter de fondos privados.

Para evitar especular sobre el posible efecto de la regularización de trabajadores sobre el flujo de remesas, y por lo tanto, sobre el bienestar de quienes reciben estos recursos, la UNCTAD podría realizar un análisis serio sobre el efecto para el migrante y su comunidad de origen.

Algunos analistas sostienen que el flujo de remesas podría reducirse ya que al tener acceso a los servicios del sistema financiero, los trabajadores podrían ahorrar y con ello entrar plenamente en el sistema del país de destino, el que

otorga crédito a todo aquel que tiene un pago garantizado. Conforme vayan entrando más trabajadores al sistema, se reducirían los flujos de remesas; aunque también existe la posibilidad de que los trabajadores solamente ahorren y en lugar de efectuar envíos periódicos, elijan la opción de manejar cuentas que les permitan acceder a sus recursos en cualquier lado de la frontera. Quienes resultarían afectados bajo esta opción serían todos aquellos que intervienen en el envío de remesas, en la recepción y en el canje.

En el tema migratorio también debe considerarse que los papeles de género han cambiado, principalmente en América Latina y el Caribe: ahora son las mujeres y no los hombres los que buscan una mejor oportunidad en el extranjero. De acuerdo con datos del Instituto Internacional de Investigación y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (INSTRAW), el 54 % de los migrantes en América Latina son mujeres y en el mundo es el 48%. Esto se explica en parte porque en general hay más oportunidades en el mercado laboral para la mujer que para el hombre. Dado el envejecimiento de la población, las mujeres encuentran oportunidades en las cadenas de cuidado, en hospitales y hogares. Asimismo, el aumento de la migración femenina está teniendo cambios en el envío y uso de las remesas en los países de origen. Hay estudios que señalan que la mujer representa el grupo más vulnerable frente a los abusos y la discriminación.

Reflexiones finales

Temas críticos como los efectos económicos y sociales de la migración, la migración de personas calificadas, la migración femenina y cómo asegurar que los programas de migración temporal sean positivos tanto para los países de origen como para los de destino, deberán discutirse a fondo tomando en cuenta la soberanía de los países, el desarrollo y el equilibrio económico y social. No debemos soslayar que los países de origen corren el riesgo de perder algunos de sus escasos recursos, no sólo por lo que respecta a los trabajadores calificados, sino también a la inversión pública en la formación y educación de esos trabajadores. Una posible solución del complejo y multidimensional fenómeno migratorio, podría estar en un manejo adecuado de los flujos migratorios a través de un consenso en lo que se refiere a prioridades y valores compartidos en los países de origen, tránsito y destino, en el que se pueda sustentar un marco para la acción conjunta.

El Consenso de Sao Paulo reforzó el papel de UNCTAD en la esfera de los servicios, incluyendo Modo 4. Ahora, el Acuerdo de Accra, lanza un reto abierto a la UNCTAD y a sus Estados miembros en momentos en que la política migratoria se ha endurecido en los países desarrollados de destino, principalmente en la Unión Europea, Estados Unidos, Suiza y Canadá.

* Consejera de la Misión Permanente de México ante la Oficina de las Naciones Unidas y otros organismos especializados con sede en Ginebra.

ICTSD al día

Evaluando el impacto de las negociaciones agrícolas

Mientras los ministros se preparan para reunirse en Ginebra a finales de julio en un esfuerzo por finalizar un acuerdo marco en las negociaciones agrícolas, se vuelve de suma importancia entender cuáles serán las implicaciones en materia de comercio y desarrollo del proyecto de acuerdo de mayo pasado sobre las 'modalidades' agrícolas de la OMC.

ICTSD, el International Food & Agricultural Trade Policy Council y el International Food Policy Research Institute encomendaron una serie de estudios con la finalidad de analizar el impacto de un futuro acuerdo de la OMC en algunos países.

Los estudios examinan las implicancias que el acuerdo propuesto tendría para la Unión Europea (UE), Estados Unidos (EE.UU.) e India, tomando en cuenta los intereses ofensivos y defensivos en materia de acceso a mercado, ayuda interna y competencia de las exportaciones. Asimismo, un documento a modo de análisis general evalúa hasta qué punto el acuerdo cumple con los objetivos acordados inicialmente en la Ronda de Doha, comparándolos con los resultados de la Ronda Uruguay. Los estudios fueron elaborados por un grupo de expertos de renombre internacional.

Así también ICTSD, conjuntamente con Riza Bernabe y Raúl Montemayor, elaboraron dos estudios que analizan las disposiciones sobre productos especiales y el mecanismo de salvaguardia especial contenidas en el proyecto de texto sobre las modalidades de negociación para agricultura, y delinean las implicancias que el acuerdo de Doha podría tener en estos dos rubros.

Algunos resultados

El estudio sobre EE.UU. muestra que dicho país no va a tener que reducir sus niveles de gasto aplicados en lo que respecta a la ayuda interna. En el 2007 dicho gasto fue sustancialmente menor al nivel consolidado en la OMC; la cifra que se está negociando actualmente también sería inferior. Asimismo, el estudio señala que EE.UU. ganará acceso a mercado, principalmente en los países desarrollados.

En cuanto al estudio sobre la UE, las reducciones previstas en ayuda interna no afectarán los niveles actuales de la nueva Política Agrícola Común del bloque. Al igual que en el caso de EE.UU., el gasto aplicado en ese rubro es bastante menor al que se está negociando. El trabajo también muestra que las exportaciones hacia los países en desarrollo enfrentarán aranceles más elevados.

Tres estudios sobre productos tropicales

El tema de productos tropicales, de especial interés para los países latinoamericanos, ha sido tratado recientemente en tres interesantes documentos patrocinados por ICTSD. Estos son:

- *Tropical and Diversification Products: Strategic Options for Developing Countries*, en donde se intenta encontrar una posición intermedia entre la postura de los países latinoamericanos, proclives a una total liberalización de los productos tropicales, y aquella de los países de África, Caribe y el Pacífico, quienes persiguen lo contrario.
- *Trade Effects of SPS and TBT Measures on Tropical and Diversification Products*, como el título lo indica, examina hasta qué punto y sobre cuáles productos las medidas sanitarias, fitosanitarias y los requerimientos técnicos se convierten en barreras para la exportación de productos tropicales hacia países desarrollados.
- *Value Chains and Tropical Products in a Changing Global Trade Regime*, en el cual se analiza la cadena de valor del banano, el azúcar, las flores y el aceite de palma, con el objetivo de revelar cambios en la estructura y geografía de la producción de estos productos tropicales.

Los estudios referidos se encuentran disponibles en el sitio del Programa de Agricultura de ICTSD: <http://www.agtradepolicy.org>

Fé de erratas: En el número pasado de Puentes nos referimos en esta sección al Instituto Francés de Relaciones Internacionales, cuando lo correcto era el International Food Policy Research Institute (IFPRI).

Entre el comercio y el desarrollo sostenible

Puentes tiene como objetivo el reforzar la capacidad de los actores sociales en el área de comercio internacional y desarrollo sostenible, poniendo a su disposición información y análisis relevante para una reflexión más informada sobre estos temas. Además, busca crear un espacio de comunicación y de generación de ideas para todos aquellos involucrados en los procesos de formulación de políticas y de negociaciones internacionales.

Puentes es publicada por el Centro Internacional para el Comercio y el Desarrollo Sostenible (ICTSD), y por el Centro Internacional de Política Económica (CINPE) de la Universidad Nacional de Costa Rica.

Comité Editorial

Maximiliano Chab
Greivin Hernández González
Carlos Murillo Rodríguez
María Julia Oliva

Contribuyeron para este número

Daniela Álvarez Keller
Perla Buenrostro
Maximiliano Chab
Greivin Hernández González

ICTSD

Director ejecutivo: Ricardo Meléndez Ortiz
7, chemin de Ballexert
1219, Ginebra, Suiza
puentes@ictsd.ch
www.ictsd.org

CINPE

Director: Rafael Díaz
Tel.: (506) 263-4550
Apdo. Postal 2393-3000 Heredia,
Costa Rica
www.cinpe.una.ac.cr

La producción de PUENTES entre el comercio y el desarrollo sostenible ha sido posible gracias al apoyo generoso de todos nuestros donantes.

Para suscribirse gratuitamente a PUENTES, envíe un correo electrónico a puentes@ictsd.ch incluyendo la palabra "suscripción" en el asunto.

Las opiniones expresadas en los artículos firmados en Puentes son responsabilidad exclusiva de los autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de ICTSD, de CINPE, ni de las instituciones que ellos representan.

EVENTOS

29 de julio- 3 de agosto: **2008 International Biodiversity Conference**. Lugar: Baños, Ecuador. Información: <http://www.wildspotsfoundation.org>

7- 8 de agosto: **Seminario internacional "Las relaciones UE-ALC tras la Cumbre de Lima 2008"**. Lugar: CEPAL, Celso Furtado, Avda. Dag Hammarskjöld 3477, Santiago, Chile. Información: <http://www.eclac.org>

19 de agosto: **Taller sobre estadísticas industriales en regiones de CEPAL**. Lugar: CEPAL, Celso Furtado, Avda. Dag Hammarskjöld 3477, Vitacura, Santiago, Chile. Información: <http://www.eclac.org>

21-22 de agosto: **2nd International Sustainability Conference**. Lugar: Basilea, Suiza. Información: <http://www.isc2008.ch>

1-3 de septiembre: **29 Sesión Plenaria y 20 Aniversario del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático -IPCC-**. Lugar: Ginebra, Suiza. Información: <http://www.ipcc.ch>

1-4 de septiembre: **XIIIth World Water Congress**. Lugar: Montpellier, Francia. Información: wwc2008@msem.univ-montp2.fr; <http://www.wwc2008.msem.univ-montp2.fr>

8-9 de septiembre: **Seminario regional "La contribución de los programas sociales al logro de los objetivos de desarrollo del milenio"**. Lugar: CEPAL, Celso Furtado, Av. Dag Hammarskjöld 3477, Vitacura, Santiago, Chile. Información: <http://www.eclac.org>

9 de septiembre: **149 Reunión Ordinaria de la Organización de Países Productores de Petróleo -OPEP-**. Lugar: Viena, Austria. Información: <http://www.opec.org>

9-12 de septiembre: **13th Intergovernmental Meeting on the Action Plan for the Caribbean Environment Programme and Tenth Meeting of the Contracting Parties to the Convention for the Protection and Development of the Marine Environment of the Wider Caribbean Region**. Lugar: Antigua y Barbuda. Información: <http://www.cep.unep.org>

24- 25 de septiembre: **Foro público de la OMC 2008: "Con el comercio hacia el futuro"**. Información: <http://www.wto.org>

29 de septiembre- 3 de octubre: **25ª Comisión Forestal para América Latina -FAO-**. Lugar: Quito, Ecuador. Información: +39 0657051 +39 0657053 <http://www.rlc.fao.org>

PUBLICACIONES

Banco Mundial & Fondo Monetario Internacional. (2008). *Informe sobre seguimiento mundial 2008*. Washington.

Bizberg, I. (2008). *Alianzas público-privadas, estrategias para el desarrollo exportador y la innovación: El caso de México*. Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL-.

Blandford, D., Laborde, D. and Martin, W., (2008). *Implications for the United States of the May 2008 Draft Agricultural Modalities*. ICTSD.

Cabrera, J. & López, C. (2008). *Enfrentando los problemas de acceso: protegiendo las fuentes, mientras que se brinda certeza a los usuarios*. Gland: Unión Mundial para la Naturaleza -IUCN-.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL. (2008). *Istmo Centroamericano: Crisis global, desafíos, oportunidades y nuevas estrategias*. Santiago.

Fresnada, O. (2008). *La medida de necesidades básicas insatisfechas (NBI) como instrumento de medición de la pobreza y focalización de programas*. Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL-.

Jean, S., Josling, T., Laborde, D. (2008). *Implications for the European Union of the May 2008 Draft Agricultural Modalities*. ICTSD.

Machinea, J.L. & Kaoef, O. (2008). *América Latina y el Caribe frente al nuevo escenario económico internacional*. Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL-.

Martínez, J.M. (2008). *Generación y protección del conocimiento, Propiedad intelectual, innovación y desarrollo económico*. Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL-.

Murphy, S. & Smaller, C. (2008). *The Real Tragedy behind the Global Food Crisis*. Minneapolis, EE.UU.: Institute for Agriculture and Trade Policy.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD. (2008). *Informe Anual 2008. El fomento de la capacidad: Empoderamiento de las personas y las instituciones*. Nueva York.

Secretariat of the Convention on Biological Diversity (2008). *The Value of Nature: Ecological, Economic, Cultural and Social Benefits of Protected Areas*. Montreal.

Höhne, N., Hagemann, M. & Moltmann, S. (2008). *G8 Climate Scorecards*. Gland: World Wide Fund for Nature -WWF-.

World Bank (2008). *World Development Indicators 2008*. Washington.

World Wide Fund for Nature -WWF. (2008). *Equilibrium Safety Net. Protected areas and poverty reduction*. Gland.